OCIF OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Gobierno de Puerto Rico

Memorandos

Parte 3

SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

— Original Secretaría
— Copia
— Legal
— Examen
— Reglamentación

8200
Bogotá D.C.,

Señor
JOSEPH P. O'NEILL
Comisionado de Instituciones Financieras
Gobierno de Puerto Rico
Estación Fernández Juncos P.O. BOX 11855
San Juan
Puerto Rico

Referencia: 2000054958-0
758 Estudios especiales
39 Respuesta Final
Sin anexos

Apreciado Señor O' Neill.

Por instrucción de la Dra. Patricia Correa Bonilla, con la presente estamos remitiendo el ejemplar del memorándum de entendimiento y cooperación entre el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y esta entidad, enviado por su Despacho para su conservación.

Sin más por el momento.

Cordialmente,

Pilar Cabrera P.

PILAR CABRERA PORTILLA
Asesora

MEMORANDUM DE COOPERACION O ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE PUERTO RICO

y

LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

1. - RAZONES PARA UN MEMORANDUM DE COOPERACION.

Al existir grupos colombianos de entidades bancarias que realizan actividades financieras en Puerto Rico participando en el capital y administrando entidades bancarias de ese país y teniendo en cuenta que puede presentarse la situación inversa, ambas autoridades consideran conveniente y beneficioso cooperar para conseguir una adecuada supervisión de dichos grupos.

A tal fin, los organismos de supervisión y control antes señalados en el ámbito de sus respectivas facultades legales – numeral 8 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano y en Puerto Rico por el Artículo 10 inciso (a) (15) de la Ley 4 del 11 de octubre de 1985, acuerdan con espíritu de mutua confianza y entendimiento, basar dicha cooperación en los términos que se establecen en el presente memorándum.

2. - DISTRIBUCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES.

Ambas autoridades suscriben los principios incluidos en el documento del Comité de Supervisores de Basilea de mayo de 1983, denominado "Principios para la supervisión de los establecimientos bancarios en el extranjero" y sus desarrollos posteriores, y por consiguiente, están de acuerdo con el papel que en dicho documento se asigna a la autoridad supervisora del país de origen donde la entidad matriz del grupo esta domiciliada ("país de origen") y a la autoridad supervisora del país de acogida donde se ubican las filiales o entidades participadas ("país de acogida").

En concreto, ambas autoridades aceptan que la autoridad del país de origen supervisará la organización, gestión y control interno, los riesgos, la suficiencia del capital y en general todos los aspectos significativos que pudieran afectar la solvencia y estabilidad de la matriz y el grupo en su conjunto, debiendo tener acceso a toda la información de las entidades que componen el mismo y que resulte necesaria a dichos efectos. Por su parte, la autoridad del país de acogida supervisará la organización, gestión, el control interno, riesgos, la eficiencia de las políticas de control al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, el capital y por tanto, la continuidad de la entidad o entidades con actividad en su territorio asegurando, de acuerdo con las

normas que sean de aplicación local, la razonabilidad de sus estados financieros y la exactitud de la información recibida por la autoridad del país de origen.

Además, en el caso de que las entidades operantes en el país de acogida hayan establecido sucursales, subsidiarias o filiales en otros países, el órgano supervisor del país de acogida adquiriría, a su vez, la responsabilidad como supervisor del país de origen en relación con el subgrupo correspondiente.

3. - COMPROMISO GENERAL DE COOPERACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION.

Sin perjuicio de los aspectos de detalle y especificaciones que se relacionan mas adelante, ambas autoridades se comprometen a colaborar estrechamente en la consecución de los objetivos indicados en el punto anterior, para lo cual intercambiarán, por propia iniciativa o a petición, la información disponible que sea significativa y, en general, facilitarán, en la medida de sus posibilidades, el cumplimiento de sus respectivas funciones.

En particular, el organismo supervisor de la matriz está interesado en identificar el conjunto de empresas pertenecientes al grupo, o en las que éste participa significativamente, y en conocer las operaciones intergrupo y cualquier otra información que sea susceptible de producir ajustes en los estados consolidados, así como cualquier problema o debilidad que se haya manifestado en las operaciones, en los controles internos, en la situación financiera o en la imagen publica de las empresas con actividad en el país de acogida. En este sentido, y siempre que la información sea relevante, el organismo supervisor de la matriz tiene interés en conocer las observaciones, los requerimientos, las sanciones impuestas y, en general, cualquier medida tomada por las autoridades financieras del país de acogida en relación con las empresas o los directivos de los grupos en los cuales se posea inversiones.

Además, el país de origen de la inversión estará interesado en que el organismo supervisor de acogida, le comunique cualquier información significativa que llegue a su conocimiento que haga dudar que la gestión del grupo se lleva a cabo de una manera prudente. Asimismo, el ente supervisor del país de origen, debe poder obtener de las entidades matrices la información contable o de cualquier naturaleza de las empresas participadas necesaria para el control de sus riesgos y para su adecuada consolidación y, en particular, la información pormenorizada de la inversión crediticia y de la cartera de valores; a tal fin el organismo supervisor del país de origen podrá recabar el apoyo del organismo supervisor del país de acogida para que dichas entidades participadas suministren a sus entidades matrices tales informaciones.

El organismo supervisor del país de acogida de la inversión, por su parte, está particularmente interesada en conocer la calidad de la gestión o de los controles internos establecidos por el banco matriz, así como los problemas o debilidades del grupo en su conjunto, o las medidas tomadas por el ente supervisor del país de origen, que pudieran tener repercusión en la estabilidad de las entidades locales.

Ambas autoridades están interesadas en conocer la situación y evolución de los mercados financieros respectivos y la posición competitiva de los grupos con presencia en el otro país y de las filiales, subsidiarias o sucursales que forman parte de los mismos.

4. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

4.1.- La información que se intercambie se utilizará únicamente a efectos de supervisión bancaria y estará sujeta a las restricciones legales del secreto bancario de acuerdo con las regulaciones existentes en cada país.

4.2.- En Puerto Rico, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 Inciso (a) (15) de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras" (Ley 4), el Comisionado de Instituciones Financieras tendrá poderes y facultades para otorgar contratos o convenios de cooperación con otras jurisdicciones para, entre otras cosas, llevar a cabo exámenes conjuntos y compartir información confidencial, no obstante lo dispuesto en el Inciso (d) del Artículo 20 de dicha ley, recopilada en dichos exámenes de instituciones financieras, compartir información con cualquier otra agencia supervisora de instituciones financieras de cualquier otra jurisdicción, o cualquier organización afiliada con o representando una o más agencias supervisoras de instituciones financieras. Antes de divulgar cualquier información confidencial a tenor con lo dispuesto en dicho artículo, el Comisionado obtendrá de dicha agencia supervisora un compromiso de mantener el carácter confidencial de tal información, hasta donde sea permisible bajo la Ley Núm. 4 o cualquier otra ley aplicable.

Además, bajo la Sección 28(h) de la Ley Núm. 55 del 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos" (Ley 55), los informes que rindan los examinadores al Comisionado de Instituciones Financieras en relación con el examen practicado de cualquier banco o banco extranjero, serán de carácter confidencial, excepto para la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o una comisión nombrada por ésta, o para las demás agencias supervisoras, según definidas, de dicho banco. Disponiéndose además en dicha ley que los asesores legales o financieros de la Junta de Directores y los auditores externos de un banco estarán excluidos del alcance de la mencionada sección, y tendrán acceso a dichos informes, sujeto a los mismos requerimientos de confidencialidad a los que están sujetos los miembros de la junta de directores.

También bajo la Ley 52 del 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional" (Ley 52), la información que le provea una entidad bancaria internacional al Comisionado bajo las disposiciones de dicha ley y de los reglamentos adoptados por el Comisionado al amparo de la misma, deberá mantenerse confidencial, excepto: (i) cuando la revelación de dicha información sea requerida por ley u orden judicial, o (ii) por requerimiento formal de una agencia gubernamental doméstica o foránea en el curso del ejercicio de su función supervisora

cuando el Comisionado tenga motivos fundados para entender que es el mejor interés público. En tal caso, la información se entregará bajo un acuerdo obligatorio con la agencia gubernamental concernida de mantener el carácter confidencial de tal información. Disponiéndose, que la excepción bajo la cláusula (ii) anterior no se extenderá en ningún caso a información sobre los clientes de la entidad bancaria internacional.

4.3.- En Colombia, de conformidad con lo reglado en el inciso cuarto del articulo 15 de la Constitución Nacional, el inciso segundo del articulo 61 y el numeral 2o. del articulo 63 del Código de Comercio y el numeral lo., literal b) del articulo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Superintendencia Bancaria, se encuentra facultada para conocer cualquier aspecto relevante relacionado con su actividad y operaciones, así como cualquier documento que trate sobre tales aspectos, para el desarrollo de su potestad de vigilancia y control.

En lo que hace con el intercambio de información entre autoridades supervisoras y dado que se trata de relaciones económicas internacionales se aplicaría lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución Política que trata sobre dichas relaciones con base en la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

5.- INSPECCIONES 'IN SITU'.

5.1 En Puerto Rico de conformidad con el Artículo 3 de la Ley 4, el Comisionado de Instituciones Financieras tendrá, entre otras funciones dispuestas en dicha ley, la responsabilidad primordial de fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en Puerto Rico. También bajo el Artículo 10(a)(12)(l) el Comisionado de Instituciones Financieras tiene el poder y la facultad de llevar toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten a cualquier rama de la industria financiera para los cuales podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos.

Además, bajo la Sección 28 de la Ley 55, la política pública del Gobierno de Puerto Rico es que los negocios de todos los bancos e instituciones bancarias organizadas de acuerdo con las Leyes de Puerto Rico, y de los bancos extranjeros operando en Puerto Rico sean inspeccionados y regulados por el Comisionado de Instituciones Financieras para asegurar la operación prudente de dichos negocios y de ese modo proteger el interés público y los intereses de los depositantes, acreedores y accionistas. Bajo la citada Sección 28 todo banco o banco extranjero y toda sucursal u oficina de banco, o banco extranjero que hiciere negocios en Puerto Rico, estará sujeto a la inspección y supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras. En dichos exámenes se investigarán las condiciones y recursos del banco, el modo de conducir y manejar sus asuntos, la acción de sus directores, la inversión de fondos, la seguridad y prudencia de su administración, las garantías que haya dado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y si las prescripciones de su concesión y de la Ley han sido cumplidas en la administración de sus asuntos, así como cualquier otro asunto que el Comisionado disponga.

De otra parte, bajo la Sección 3 Inciso (a)(6) de la Ley 52, el Comisionado de Instituciones Financieras tiene el deber de supervisar, fiscalizar y auditar las entidades bancarias internacionales. Además, el Reglamento Núm. 5653 conocido como "Reglamento del Centro Bancario Internacional" establece en su Artículo 11(1)(c) que toda entidad bancaria internacional estará sujeta a la inspección y supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras quien examinará las operaciones de dicha entidad.

5.2.- En Colombia de conformidad con el numeral 4 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dentro de las facultades de supervisión, la Superintendencia Bancaria tiene las siguientes funciones: "b) Practicar visitas de inspección a las entidades vigiladas con el fin de obtener un conocimiento integral de su situación financiera, del manejo de sus negocios, o de los aspectos especiales que se requieran" y "d) Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas ajenas al sector financiero, siempre que resulten necesarias en desarrollo de su función de vigilancia e inspección y se cumplan las formalidades legales".

De acuerdo con lo reglado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Superintendencia Bancaria realiza inspecciones "in situ" en forma preventiva y para verificar controles de Ley a todas las entidades que se encuentran bajo su vigilancia y teniendo en cuenta además, las deficiencias que se detecten en los controles internos, procedimientos, indicadores de liquidez, solvencia, calificación de cartera e inversiones, defectos continuados de encaje, perdidas acumuladas que puedan poner en peligro los depósitos de los ahorradores o cualquier otra situación irregular que se detecte en el estudio de los estados financieros periódicos que remiten las entidades.

5.3. - Sobre la base de las premisas anteriores y por tanto con carácter de excepcionalidad y subsidiaridad y siempre de común acuerdo entre las partes, el organismo supervisor del país de origen podrá realizar inspecciones "in situ" a las entidades colombianas participadas por los grupos bancarios que supervisa consolidadamente. En principio esas inspecciones tendrán como objeto fundamental el conocimiento del negocio de la filial y de su gestión general, así como el examen de la eficacia de los controles internos de la matriz y de la propia filial. En cada caso concreto que se presente, ambas autoridades fijarán la forma de llevar a cabo dichas inspecciones admitiendo la posibilidad de que, cuando sea aconsejable, se realicen de forma conjunta, con equipos mixtos, o actuando el organismo supervisor del país de origen como invitado.

Ambas autoridades manifiestan que no conocen impedimento legal alguno para la realización de tales inspecciones y para el acceso por parte del organismo supervisor del país de origen a la información de las filiales. En todo caso, ambas autoridades se comprometen a colaborar, en la medida de sus posibilidades, para facilitar el acceso

del organismo supervisor del país de origen a las entidades participadas pertenezcan o no al ámbito de la competencia del organismo supervisor del país de acogida.

En cuanto a las inspecciones que el organismo supervisor del país de acogida realice a las entidades participadas, esta se compromete a informar al organismo supervisor del país de origen enviando un resumen de los aspectos mas significativos del informe resultante.

6.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALICE UN GRUPO.

Ambas autoridades acuerdan, siempre que sea necesario y al menos una vez al año, intercambiar listas de las entidades de las que se tenga conocimiento, sean consolidables o no, que pertenezcan a los grupos en los cuales se posea inversión. Asimismo, se informara a los organismos de control una vez al año, de las operaciones intergrupo más relevantes que se conozca hayan realizado los grupos, tanto dentro del país como con otras entidades en el exterior.

7.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACION DE FILIALES BANCARIAS.

La creación de subsidiarias, filiales o sucursales bancarias en el extranjero, o la adquisición de participaciones significativas directas o indirectas en una entidad ya existente, estará sujeta a la previa autorización de los respectivos organismos de control de conformidad con la letra f del numeral 3 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano y en Puerto Rico de conformidad con la Ley 4, la Ley 55 y la Ley 52. Dicha autorización puede denegarse por las causales establecidas en la ley o cuando, atendiendo a la situación financiera de la entidad de crédito o a su capacidad de gestión, se considere que el proyecto puede afectarle negativamente; no pueda asegurarse la efectiva supervisión del grupo, en base consolidada; o cuando la actividad de la entidad dominada no quede sujeta a un efectivo control por parte de una autoridad supervisora nacional.

El Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y la Superintendencia Bancaria de Colombia exigen que las entidades matrices de las subsidiarias y filiales o sucursales extranjeras deben disponer de información adecuadamente actualizada y fluida sobre la situación financiera de dichas subsidiarias y filiales o sucursales, sobre el nivel de riesgos y sobre el control y gestión de los mismos, tanto localmente como dentro del grupo.

Ambas autoridades manifiestan que someten a las entidades bancarias participadas por grupos bancarios extranjeros a las mismas exigencias y tratamiento supervisor que a las demás entidades autorizadas en el país. Asimismo, los organismos supervisores de las entidades matrices deben someter a sus filiales bancarias extranjeras a auditoria externa o revisoría fiscal, preferiblemente por la misma firma que audite al grupo en su conjunto.

El Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y la Superintendencia Bancaria de Colombia se consultarán libremente sobre cualquier aspecto y podrán solicitarse el intercambio de toda la información significativa en sú poder relacionada con dichas subsidiarias y filiales o sucursales sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 4 de este memorando.

8. - ASPECTOS RELACIONADOS CON OTRAS FILIALES FINANCIERAS SUPERVISADAS POR OTRAS AUTORIDADES.

Los organismos supervisores de ambos países, estarán interesados en que se les comunique cualquier información que llegue a su conocimiento que pueda ser de interés para la supervisión de los grupos financieros bajo su supervisión. De igual forma, están interesados en conocer las modificaciones relevantes en las normas legales locales que afecten a dichas entidades.

9.- ASPECTOS RELACIONADOS CON OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS.

En ambos países las participaciones de las entidades bancarias en empresas no financieras están sujetas a ciertas prohibiciones y limitaciones. Los organismos de supervisión estarán interesados en que se les comunique cualquier información que llegue a su conocimiento sobre el tema.

10. - CONTACTOS O REUNIONES DE REPRESENTANTES DE AMBAS AUTORIDADES.

Las personas encargadas de funciones de supervisión en ambos países podrán, en todo momento, solicitar asesoramiento y aclaraciones de la otra parte, así como la realización de las reuniones que se consideren necesarias.

11.- COMPROMISO GENERAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE LOS RESPECTIVOS SISTEMAS BANCARIOS.

Ambas autoridades se comprometen a intercambiar y mantener actualizada toda la información relevante sobre sus respectivos sistemas bancarios, sobre la normatividad aplicable y sobre las políticas nacionales de supervisión.

12. - APOYO INTERINSTITUCIONAL.

Como parte de este acuerdo el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y la Superintendencia Bancaria de Colombia realizarán sus mejores esfuerzos para mantener una cooperación interinstitucional que posibilite la realización de pasantías de sus funcionarios, el desarrollo de cursos y seminarios y la provisión mutua de asesoramiento por parte de funcionarios en áreas que puedan ser requeridas.

13. - RECIPROCIDAD Y ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO.

Con la suscripción del presente documento ambas autoridades acuerdan que su contenido se aplicará recíprocamente en ambos sentidos y que el memorándum será revisado para su adecuada actualización siempre que sea necesario o a petición de cualquiera de las partes.

El presente memorándum de cooperación o entendimiento se firma en las ciudades de San Juan, Puerto Rico el día de agosto de 2000 y en Bogotá, Colombia, el día del mes de septiembre de 2000, en dos (2) ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la Superintendencia Bancaria
de Colombia

PATRICIA CORREA BONILLA
Superintendente Bancario

Por el Comisionado de Instituciones
Financieras de Puerto Rico

JOSEPH P. O'NEILL
Comisionado de Instituciones
Financieras

2000

Puerto Rico

Financial Institution Fraud

Memorandum of Understanding

FY 2000

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) constitutes an agreement voluntarily entered into between the Office of the Commissioner of Financial Institutions (CFI) and the Federal Bureau of Investigation (FBI).

Purpose & Mission

The purpose of this MOU is to establish policy for the FBI and CFI regarding referral and investigation of criminal matters of mutual interest in regard to financial institution fraud, investment fraud and mortgage fraud. Furthermore, to delineate the responsibilities of the participants, maximize inter-agency cooperation, and formalize relationships between the participating agencies for policy guidance, planning, training, public and media relations.

It is mutually agreed that an MOU should be established to effectively combat financial institution fraud, investment fraud and mortgage fraud to maximize the cooperation between the FBI and the CFI. It is further agreed that the participating agencies will coordinate their respective investigations and audits to assist each agency in fulfilling its own mission and responsibilities by combining expertise and investigative resources to combat financial institution fraud, investment fraud and mortgage fraud in Puerto Rico. However, each agency will retain all rights and obligations under existing statutes and regulations and this agreement will not restrict the legal prerogatives of either agency.

Administration & Procedure

In accordance with the terms of this MOU, the FBI will establish and develop a case referral program with the CFI for the benefit of each agency. The establishment of policy, program involvement, and direction will be the responsibility of the FBI Special Agent in Charge (SAC) and CFI Commissioner, respectively.

A. *Supervision*

Each participating agency will designate a coordinator who will maintain liaison and coordinate investigative efforts and activities of their agency's assigned personnel.

B. *Case Referral*

It is agreed that the CFI will, within thirty (30) days after detection, refer to the FBI all cases where a reasonable suspicion of a violation of federal law arises involving investment fraud, (or) financial institution fraud, *or mortgage fraud.* In addition, the CFI will fully assist the FBI in any case that has been referred.

C. ***Investigative Exclusivity***

It is agreed that all matters of federal jurisdiction, designated to be handled by the FBI, will not knowingly be subject to non-FBI law enforcement efforts. It is incumbent on each agency to make proper internal notification regarding the existence of referred matters and areas of concern. It is agreed that there is to be no unilateral action taken on the part of the FBI or the CFI relating to investment fraud, (or) financial institution fraud, *or mortgage fraud* investigations or areas of concern. All law enforcement actions will be coordinated and cooperatively carried out.

D. ***Reports and Records***

All investigative records related to matters of federal jurisdiction will be maintained at an approved FBI location. All joint interviews of subjects or witnesses will be reported in FBI format. Placement of all or part of said information into participating agency files rests with the discretion of supervisory personnel of the concerned agencies. Classified information and/or documents containing information that identifies or tends to identify an FBI informant will not be placed in the files of participating agencies unless appropriate FBI policy has been satisfied.

E. ***Prosecutions***

All investigative procedures are to conform to the requirements for federal prosecution. A determination will be made on a case-by-case basis whether the prosecution of referred cases will be at the state or federal level. This determination will be based on the evidence obtained and a consideration of which level of prosecution would be of the greatest benefit to the overall objectives of this MOU. It is agreed that in the event that an investigation is developed in a matter not within the jurisdiction of the FBI, the FBI agrees to provide all relevant information to state and local authorities. Whether to continue and/or conduct additional investigation of the state or local crimes involved will be at the sole discretion of the respective state and local authorities.

F. ***Investigative Methods/Evidence***

For cases assigned to an FBI Special Agent or in which FBI informants or cooperating witnesses are utilized, the parties agree to conform to federal standards concerning interview reporting, evidence collection, processing, storage, and electronic surveillance. In all cases, the parties agree to utilize federal standards pertaining to evidence handling and electronic surveillance activities to the greatest extent possible. All evidence acquired during any joint

investigation will be secured in the evidence room at the San Juan FBI Field Office. The federal rules and policies governing the submission, retrieval, and chain of custody of evidence will be strictly followed. The use of other investigative methods (search warrants, interceptions of oral communications, etc.) and reporting procedures in connection therewith will be consistent with the policy and procedures of the FBI. CFI personnel will have access to the evidence in joint cases at the FBI office in accordance with federal rules and policies.

G. ***Dispute Resolution***

In cases of overlapping jurisdiction, the participating agencies agree to work in concert to achieve the objectives herein. It is expected that operational disputes, controversies, or problems will be addressed and resolved through the cooperation of assigned personnel. The parties agree to attempt to resolve any disputes at the field level first before referring the matter to supervisory personnel for resolution.

H. ***Security of Investigations***

It is recognized that investigations regarding investment fraud, (and) financial institution fraud, *and mortgage fraud* are inherently sensitive, inasmuch as they involve the reputation and credibility of public and/or financial officials. Further, the security of such investigations is often vital to the case's success. For these reasons, the participating agencies agree that discussion of its cases must be restricted to a need-to-know basis.

Equipment

A. ***Vehicles and Radios***

Each participating agency will be responsible for the transportation and cost of its respective assigned representative(s). The FBI agrees and authorizes CFI representative(s) to this MOU to travel as passengers in FBI vehicles for surveillance, investigative, and undercover activities in connection with joint operations. The CFI similarly agrees and authorizes FBI representative(s) to travel as passengers in CFI vehicles for surveillance, investigative, and undercover activities in connection with joint operations.

B. ***Equipment***

Property of the FBI and CFI may be provided on a case-by-case basis when needed to conduct joint investigations and operations.

Liability

Each agency acknowledges that its liability, if any, for the negligent or wrongful acts or omissions committed by its employees is governed by applicable local law. The parties agree that they will not be responsible or liable for acts performed by personnel of other member

agencies during the duration of this MOU.

Each agency further acknowledges that the federal government does not contract or promise to consider indemnifying the individual member, substituting the United States as a party defendant in civil litigation, or providing representation to state and local law enforcement officers who cooperate with the FBI on an informal basis as part of their state or local duties unless they have been deputized as a federal law enforcement officer or have been detailed to a federal agency under the Intergovernmental Personnel Act (IPA), 5 U.S.C. § 3374(c)(2).

Media

All media releases and statements will be mutually agreed upon and jointly handled according to FBI and participating agency guidelines. The parties agree that information will only be disseminated to the media in accordance with the terms of this MOU.

Duration & Terms of Agreement

This MOU is executed for the sole purpose of documenting the understandings and agreements between and among the parties hereto in an effort to achieve a more effective and efficient cooperative inter-agency law enforcement body. Nothing in this MOU is intended to create, nor does it create, an enforceable legal right or private right of action.

This MOU constitutes the complete agreement between and among the participants hereto and will remain in effect for as long as the participants determine that the investigative needs exist. The duration of this Agreement begins June 1, 2000 and is indefinite, contingent upon Congressional approval of necessary funding, and the continued desire of each agency to participate. This Agreement may be modified at any time by written consent of each participating agency; however, modifications will have no force and effect unless reduced to writing and signed by an authorized representative of each of the participating agencies. A participating agency may terminate its involvement at any time by providing a written notice to that effect to the other participating agency with at least thirty (30) days prior notice.

Signatories

The undersigned parties represent that they have authority to execute this Agreement on behalf of their respective agencies. By subscription of signatures below, the parties herewith acknowledge that they have read, understand, concur with, and will abide by the foregoing.

Fred Gale

CONTRACTING OFFICER
Office of the Contractor
Federal Bureau of Investigation

8-24-2000
Date

Marlene M. Hunter

MARLENE M. HUNTER
Special Agent in Charge, San Juan Division
Federal Bureau of Investigation

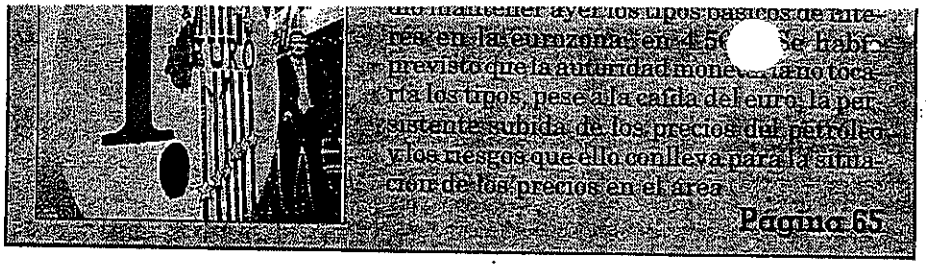
9/14/00
Date

JOSEPH O'NEILL
Commissioner
Commission of Financial institutions

9/14/2000
Date

NEGOCIOS

José Julio Balmaceda / Editor Tel.721-2300 Exts. 278, 360 394, 346 / Fax 723-2640



...financiero ayer los tipos básicos de interés en la eurozona, en 4.50%. Se había previsto que la autoridad monetaria tocaría los tipos, pese a la caída del euro, la persistente subida de los precios del petróleo y los riesgos que ello conlleva para la situación de los precios en el área.

Página 65

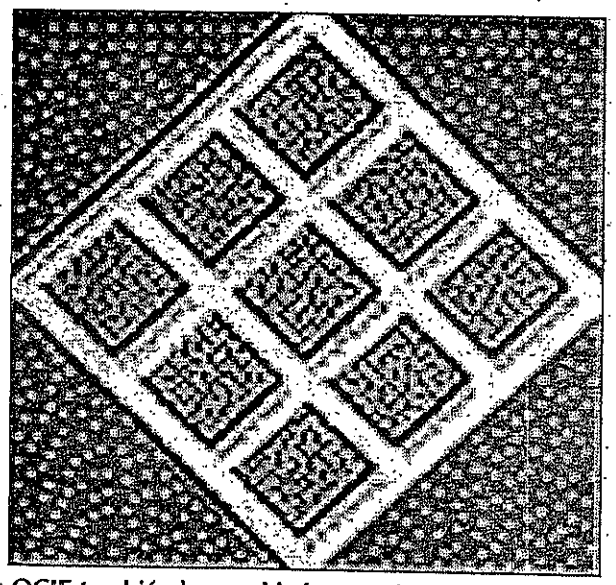
Mano dura al fraude financiero

Por Luisa García Pelatti
Redactora — EL VOCERO

Un cerrado cerco acaba de tenderse en torno al fraude financiero en Puerto Rico. El Comisionado de Instituciones Financieras, Joseph P. O'Neill, y Marlene Hunter, titular de la división de San Juan del Federal Bureau of Investigations (FBI) suscribieron ayer un revolucionario acuerdo de colaboración, para desarrollar estrategias, procedimientos e investigaciones sobre fraudes en el sistema financiero local.

O'Neill reveló a EL VOCERO que, recientemente, se ha descubierto en la Isla la existencia de varios fraudes relacionados con inversiones, conocidos como "esquemas piramidales", así como la presentación de planillas de contribuciones falsificadas, para obtener préstamos hipotecarios FHA.

También se señaló que está pendiente de someterse al Gran Jurado una serie de investigaciones, como resultado del acuerdo con el FBI. Entre otros, "hay casos relacionados con esquemas de inversión fraudulentos, aunque usualmente son personas y no se trata de bancos asegurados por el FDIC", señaló el Comisionado.



OCIF también ha cambiado su política a la hora de hacer públicos los resultados de investigaciones. Cualquier orden de cese y desista será difundida vía Internet.

El funcionario anticipó también que su oficina (OCIF) ha cambiado su política a la hora de hacer públicos los resultados de sus investigaciones.

"Hemos decidido que, a partir de ahora, cualquier orden de multa o cese y desista, contra una institución, la vamos a poner en nuestra página de Internet, al igual que hacen las agencias federales bancarias", señaló.

"El mensaje es bien claro, toda persona que desee ofrecer servicios financieros en Puerto Rico tiene que cumplir con la ley", advirtió O'Neill.

"Dependemos mucho de la información de las personas", indicó por su parte Hunter, e invitó a las personas que hayan sido objeto de fraude (o cualquier otro delito financiero) a llamar al 754-6000 para denunciar los casos.

OCIF también cuenta con una línea caliente (723-8445) para atender querellas; recientemente esta agencia firmó un contrato con el Departamento de Justicia, para aumentar (de uno a tres) el número de fiscales asignados a casos criminales en el sistema financiero.

A pesar de concluir su estrategia regional...

BBVA prosigue expansión local

Por Luisa García Pelatti
Redactora — EL VOCERO

El anunciado fin de la expansión de sucursales del grupo BBVA, en América Latina, no parece afectar en absoluto las ambiciones de la entidad en la Isla. BBVA Puerto Rico planifica seguir creciendo en el país, y ahora revela la apertura de cuatro sucursales, antes de que finalice el año en curso.

Al respecto, Steven Delgado, vicepresidente ejecutivo de comunicación e imagen del Banco Bilbao Vizcaya de Puerto Rico, confirmó a EL VOCERO que la estrategia del grupo en la Isla es diferente. "El banco tiene planificado continuar creciendo en el mercado, pero no tiene planificado ...

inversión (varias fuentes creen que esta base podría estar en Miami).

En referencia a estos objetivos, Delgado señaló que, contrario al resto de los países, la banca corporativa de Puerto Rico es de las más desarrolladas de América Latina. "Fortalecimos nuestra posición en este segmento con

AGREEMENT – U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
(SPC) CONFIDENTIALITY
SEC

COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

ANTONIO FARÍA
COMMISSIONER

March 9, 2001

Karen M. O'Brien, Esq.
General Counsel
North American Securities
Administrators Association, Inc.
10 G Street, NE, Suite 710
Washington D. C. 20002

Dear Ms. O'Brien:

As requested by Nancy L. Hansbrough, Esq., Assistant Chief Counsel of the U. S. Securities and Exchange Commission, please find enclosed a copy of the Confidentiality Agreement fully executed between the SEC and the Commonwealth of Puerto Rico today.

Yours truly,

Enclosure

FERNANDEZ JUNCOS STATION PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855
PHONE: (787) 723-3131 FAX (787) 723-4042
E mail: afaría@cif.gov.pr

CONFIDENTIALITY AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO AND THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WITH RESPECT TO NON-PUBLIC EXAMINATION INFORMATION

The Commissioner of Financial Institutions of the Commonwealth of Puerto Rico ("Commonwealth") and the Office of Compliance Inspections and Examinations of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") (referred to individually as a "Party" or together as the "Parties") hereby enter into this Confidentiality Agreement ("Agreement"). This Agreement applies to the sharing of: (1) broker-dealer examination deficiency letters; (2) investment adviser examination deficiency letters issued in the most recent past examinations of investment advisers that are within the jurisdiction of the Commonwealth and are no longer eligible for registration with the SEC after (a) July 8, 1997 or (b) upon effectiveness of investment adviser legislation in the state of Wyoming (collectively, (1) and (2) shall be called "Deficiency Letters"); (3) referrals for further investigation or possible enforcement action ("Enforcement Referrals"); and (4) other non-public documents shared in connection with the coordination of broker-dealer examination programs ("Coordination Documents").

For purposes of this Agreement, the term "Deficiency Letters" as used in (1) and (2) above shall mean letters issued to broker-dealers or investment advisers setting forth deficiencies and/or violations of law found during an examination. For purposes of this Agreement, the term "Enforcement Referrals" as used in (3) above, and "Coordination Documents," as used in (4) above, may include examination reports, workpapers, and drafts; inter-agency and intra-agency communications related to examinations; correspondence related to examinations (including deficiency letters); examination schedules; and any other non-public records, materials, or information related to examinations of broker-dealers or investment advisers subject to the regulatory authority of either or both Parties. Collectively, Deficiency Letters, Enforcement Referrals, and Coordination Documents subject to this Agreement shall be called "Documents."

Each Party shall have sole discretion to determine whether to provide the other Party with access to Deficiency Letters, Enforcement Referrals, or Coordination Documents, in light of, among other things, any ongoing examinations, enforcement investigations, or civil or criminal investigations or proceedings. This Agreement does not create any rights of access to non-public Documents.

Each Party agrees that except as set forth in the next paragraph, it will preserve the confidentiality of all such Documents provided by the other Party. The Parties also agree that all such Documents prepared jointly by the two Parties are confidential, and that each will maintain the confidentiality of such Documents, except as set forth in the next paragraph.

As mutual and material terms of this Agreement, the Parties exchange the following representations and agree to the following terms:

> The Commonwealth represents that it has legal authority to preserve the confidentiality of the Documents that the SEC provides to it pursuant to this Agreement. The Commonwealth shall promptly notify the SEC of any requests by third parties for access to such Documents. The Commonwealth agrees that it will furnish such Documents to third parties, make public such Documents, or otherwise make public information contained solely in such Documents, only with the prior authorization of the SEC or as required by court order. The Commonwealth shall assert on its own behalf all legal exemptions or privileges

applicable to the Documents. The SEC may also assert on its own behalf all applicable legal exemptions or privileges.

The SEC represents that it has legal authority to preserve the confidentiality of the Documents that the Commonwealth provides to it pursuant to this Agreement. To the extent permitted by federal law, the SEC shall promptly notify the Commonwealth of any requests by third parties for access to such Documents. The SEC agrees that it will furnish such Documents to third parties, make public such Documents, or otherwise make public information contained solely in such Documents only with the prior authorization of the Commonwealth or as required by court order or federal law. The SEC shall assert on its own behalf all legal exemptions or privileges applicable to the Documents. The Commonwealth may also assert on its own behalf all applicable legal exemptions or privileges.

The Parties, upon mutual agreement and consent, may revise or modify this Agreement in writing. The Party recommending the revision or modification shall provide the other Party with 30 days written notice of the proposed change.

Either Party may terminate this Agreement upon 30 days written notice to the other Party. Following termination, all Documents that were provided subject to this Agreement shall remain confidential pursuant to its terms.

This Agreement supersedes any prior applicable agreement between the SEC and the Commonwealth (except for any previously executed confidentiality agreement concerning documents prepared in connection with joint examinations of investment advisers, where applicable).

Lori A. Richards — Date: 2 27 01
Director
Office of Compliance Inspections and Examinations
U.S. Securities and Exchange Commission

Name: — Date
Title:
The Commissioner of Financial Institutions of the Commonwealth of Puerto Rico

CONFIDENTIALITY AGREEMENT BETWEEN THE COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO AND THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WITH RESPECT TO NON-PUBLIC EXAMINATION INFORMATION

The Commissioner of Financial Institutions of the Commonwealth of Puerto Rico ("Commonwealth") and the Office of Compliance Inspections and Examinations of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") (referred to individually as a "Party" or together as the "Parties") hereby enter into this Confidentiality Agreement ("Agreement"). This Agreement applies to the sharing of: (1) broker-dealer examination deficiency letters; (2) investment adviser examination deficiency letters issued in the most recent past examinations of investment advisers that are within the jurisdiction of the Commonwealth and are no longer eligible for registration with the SEC after (a) July 8, 1997 or (b) upon effectiveness of investment adviser legislation in the state of Wyoming (collectively, (1) and (2) shall be called "Deficiency Letters"); (3) referrals for further investigation or possible enforcement action ("Enforcement Referrals"); and (4) other non-public documents shared in connection with the coordination of broker-dealer examination programs ("Coordination Documents").

For purposes of this Agreement, the term "Deficiency Letters" as used in (1) and (2) above shall mean letters issued to broker-dealers or investment advisers setting forth deficiencies and/or violations of law found during an examination. For purposes of this Agreement, the term "Enforcement Referrals" as used in (3) above, and "Coordination Documents," as used in (4) above, may include examination reports, workpapers, and drafts; inter-agency and intra-agency communications related to examinations; correspondence related to examinations (including deficiency letters); examination schedules; and any other non-public records, materials, or information related to examinations of broker-dealers or investment advisers subject to the regulatory authority of either or both Parties. Collectively, Deficiency Letters, Enforcement Referrals, and Coordination Documents subject to this Agreement shall be called "Documents."

Each Party shall have sole discretion to determine whether to provide the other Party with access to Deficiency Letters, Enforcement Referrals, or Coordination Documents, in light of, among other things, any ongoing examinations, enforcement investigations, or civil or criminal investigations or proceedings. This Agreement does not create any rights of access to non-public Documents.

Each Party agrees that except as set forth in the next paragraph, it will preserve the confidentiality of all such Documents provided by the other Party. The Parties also agree that all such Documents prepared jointly by the two Parties are confidential, and that each will maintain the confidentiality of such Documents, except as set forth in the next paragraph.

As mutual and material terms of this Agreement, the Parties exchange the following representations and agree to the following terms:

> The Commonwealth represents that it has legal authority to preserve the confidentiality of the Documents that the SEC provides to it pursuant to this Agreement. The Commonwealth shall promptly notify the SEC of any requests by third parties for access to such Documents. The Commonwealth agrees that it will furnish such Documents to third parties, make public such Documents, or otherwise make public information contained solely in such Documents, only with the prior authorization of the SEC or as required by court order. The Commonwealth shall assert on its own behalf all legal exemptions or privileges

applicable to the Documents. The SEC may also assert on its own behalf all applicable legal exemptions or privileges.

The SEC represents that it has legal authority to preserve the confidentiality of the Documents that the Commonwealth provides to it pursuant to this Agreement. To the extent permitted by federal law, the SEC shall promptly notify the Commonwealth of any requests by third parties for access to such Documents. The SEC agrees that it will furnish such Documents to third parties, make public such Documents, or otherwise make public information contained solely in such Documents only with the prior authorization of the Commonwealth or as required by court order or federal law. The SEC shall assert on its own behalf all legal exemptions or privileges applicable to the Documents. The Commonwealth may also assert on its own behalf all applicable legal exemptions or privileges.

The Parties, upon mutual agreement and consent, may revise or modify this Agreement in writing. The Party recommending the revision or modification shall provide the other Party with 30 days written notice of the proposed change.

Either Party may terminate this Agreement upon 30 days written notice to the other Party. Following termination, all Documents that were provided subject to this Agreement shall remain confidential pursuant to its terms.

This Agreement supersedes any prior applicable agreement between the SEC and the Commonwealth (except for any previously executed confidentiality agreement concerning documents prepared in connection with joint examinations of investment advisers, where applicable).

Lori A. Richards — 22701 Date
Director
Office of Compliance Inspections and Examinations
U.S. Securities and Exchange Commission

Name: Antonio Faria — 3/21/2001 Date
Title: Commissioner
The Commissioner of Financial Institutions of the Commonwealth of Puerto Rico

COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

March 23, 2001

VIA UPS

Nancy L. Hansbrough, Esq.
Assistant Chief Counsel
U. S. Securities and Exchange Commission
450 Fifth Street, NW
Washington D.C. 20549-0906

Dear Ms. Hansbrough:

Enclosed is your copy of the Confidentiality Agreement duly executed. As requested, a copy has been forwarded to NASAA's General Counsel Office.

Please be advised that we would like to receive a copy of all deficiency letters issued after October 1, 1995 to investment advisers currently under our sole jurisdiction. Please send them to the attention of Mr. Francisco Collazo, Assistant Commissioner.

We highly appreciate your prompt response to our inquiries expediting the execution of the agreement and apologize for the mix up. We look forward to a long lasting, mutually beneficial relationship between the SEC and the Commonwealth.

Very truly yours,

José A. Saadé
Assistant Commissioner

Enclosure

ESTACION FERNANDEZ JUNCOS PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855
TEL.: (787) 723-3131 FAX (787) 723-4225
www.cif.gov.pr

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
450 FIFTH STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20549

OFFICE OF COMPLIANCE
INSPECTIONS AND
EXAMINATIONS

March 16, 2001

VIA FEDERAL EXPRESS

Jose Saade
Assistant Commissioner
The Commissioner of Financial Institutions
Centro Europa Building
1492 Ponce de Leon Avenue, Suite 600
San Juan, Puerto Rico 00907-4127

Dear Mr. Saade:

Enclosed is the copy of the Confidentiality Agreement that your agency returned to me. Unfortunately, it has not been signed. Please obtain the appropriate signature on it and return the manually signed copy to me at the following address:

Office of Compliance Inspections and Examinations
U.S. Securities and Exchange Commission
450 Fifth Street, N.W.
Washington, D.C. 20549-0906

If you have any questions, please call me at (202) 942-7477.

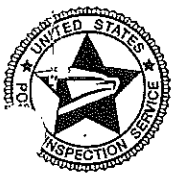
Sincerely,

Nancy L. Hansbrough

Nancy L. Hansbrough
Assistant Chief Counsel

Enclosure

AGREEMENT UNITED STATE POSTAL INSPECTION



UNITED STATES POSTAL INSPECTION SERVICE

NORTH JERSEY/CARIBBEAN DIVISION

Jose Sande

April 2, 2001

Mr. Antonio Faria
Commissioner of Financial Institutions
PO Box 11855
San Juan, PR 00910-3855

Dear Mr. Faria:

This Service will always be interested in matters presented by your office. Referrals should be sent to me with the name/telephone of the contact person in order to discuss and/or review documents concerning the matter persented.

We will conduct the necessary preliminary investigation and present the case to the U.S. Attorney for prosecution. Once our jurisdiction and the $75,000 loss threshold of the U.S. Attorney's office is documented, we would advise you in writing of the name of the Postal Inspector who will have the case assigned for investigation.

On occasions we do work white-collar crime cases jointly with other federal agencies and have always appreciated the working relationship with your staff. Therefore, if I can be of any further assistance, please contact me at (787)749-7623.

I look forward to meeting you in the near future.

Sincerely,

Juan Berrios
Postal Inspector/Team Leader

SAN JUAN FIELD OFFICE
PO BOX 363667
SAN JUAN PR 00936-3667
TELEPHONE: 787-749-7600
FAX: 787-782-8296

COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

ANTONIO FARÍA
COMMISSIONER

March 27, 2001

Mr. Juan Berrios
Team Leader
U. S. Postal Inspection Service
1510 FD Roosevelt Ave. 5th floor
Guaynabo, Puerto Rico 00968-9600

Dear Mr. Berrios:

The Office of the Commissioner of Financial Institutions has experienced through our audits over the past few years an increase in Sophisticated Fraudulent Financial Schemes.

Furthermore, a significant number of the white-collar crimes cases brought to our office's attention raise jurisdictional obstacles for us to obtain the necessary financial documents and records required to successfully complete full and thorough investigations.

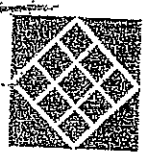
We realize the collaboration between our agencies in past joint federal investigations has been very effective and firmly believe that a continued close relationship between the U. S. Postal Inspection Service and the Commonwealth's Commissioner of Financial Institutions will facilitate the detection and prosecution of cases affecting the community we both serve.

We highly appreciate your willingness to reaffirm our mutual commitment and look forward to the viability of formalizing our law enforcement relationship.

Sincerely,

FERNANDEZ JUNCOS STATION PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855
PHONE: (787) 723-3131 FAX (787) 723-4042
E mail: afaría@cif.gov.pr

AGREEMENT MONEY TRANSMITTER
REGULATORS COOPERATIVE



COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

ANTONIO FARÍA
COMMISSIONER

February 12, 2002

Mr. Greg Gonzales
TN Department of Financial Institutions
27th Floor, William Snodgrass Bldg.
312 8th Avenue North
Nashville, TN 37243

Dear Mr. Gonzales:

As requested by Mr. Seesholtz on his February 4 letter, I am pleased to enclose the duly executed signature page to the MONEY TRANSMITTER REGULATORS COOPERATIVE AGREEMENT dated January 23, 2002.

We look forward to working under the Cooperative Agreement over money transmitter issues important to the state regulatory system.

Cordially yours,

c. Ramonita Loiz, Assistant Commissioner OCFI

enclosure

FERNANDEZ JUNCOS STATION PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855
PHONE: (787) 723-3131 FAX (787) 723-4042
E mail: afaría@cif.gov.pr

MTRA

Money Transmitter Regulators Association, Inc.

c/o PA Department of Banking
333 Market Street, 16th Fl.
Harrisburg, PA 17101-2290

October 19, 2001

Antonio Faria, Commissioner
PR Commission of Financial Institutions
Fernandez Juncos Station
San Juan, Puerto Rico 00917-3855

Dear Commissioner Faria:

The events of September 11th have changed our lives and caused us to reexamine many things. As a fellow regulator of "money transmitters", I believe you would agree that states should reexamine the way we approach this area of regulation. It is clear that the transmission of money and, in particular, the transmission through non-bank entities, is rightly receiving much attention from federal regulators and law enforcement agencies.

As President of the Money Transmitter Regulators Association, I am forwarding a copy of a Money Transmitter Regulators Cooperative Agreement ("the Agreement") which an MTRA committee drafted and recommended to the states this summer. Even before September 11th, the MTRA Board recognized that the changing nature of the industry and the responsibilities of state regulators required greater cooperation among all states.

The concept of this Agreement is simple: ensure that examinations of certain multi-state licensees are performed and then share that examination information with all signatory states that also license that transmitter. The Agreement recognizes and allows for the great diversity in state laws and resources. No state is obligated in any way by simply signing the Agreement; however, all signatory states would have the opportunity to take advantage of the cooperation that the Agreement seeks to generate to the EXTENT THAT YOUR STATE LAW WILL PERMIT.

While this project has been in the works for two years, the events of September 11th have created a greater urgency for a nationwide cooperative framework that is flexible enough for most, if not all states, to join. A number of states have indicated their willingness to sign the Agreement and execute it to the extent their resources and state law permit. If your Department has not yet determined to become a signatory, we would request that you review the Agreement and let me know your views at your earliest convenience.

Should you have questions, please call me at (717) 772-3889 or Greg Gonzales of the Tennessee Department of Financial Institutions at (615) 532-1017. We would be happy to assist you, and we look forward to hearing from you.

Sincerely,

Victor Seesholtz
President
MTRA

Enclosure

333 MARKET STREET 16th FLOOR HARRISBURG, PA 17101-2290
(717) 772-3889 FAX (717) 787-8773 seesholt@banking.state.pa.us

MONEY TRANSMITTER REGULATORS COOPERATIVE AGREEMENT

October 18, 2001

TABLE OF CONTENTS

Article 1. Definitions

Article 2. Statement of Purpose
Section 2.1 Goals
Section 2.2. Responsibilities

Article 3. Information Sharing
Section 3.1. Request for Information
Section 3.2. Providing Information
Section 3.3. Confidentiality
Section 3.4 Legal Process

Article 4. Responsibility for Examination
Section 4.1. Role of Lead State Supervisors
Section 4.2. Role of Licensing State Supervisors
Section 4.3. Planning and Scheduling
Section 4.4. Efficient Use of State Resources

Article 5. Enforcement Actions
Section 5.1. Lead State Notification and Action
Section 5.2. Actions by Licensing State

Article 6. Applicable Laws

Article 7. Applications
Section 7.1. Approval Authority

Article 8. Parties
Section 8.1. Representations and Warranties
Section 8.2. Change in Power or Authority

TABLE OF CONTENTS
(Cont)

Article 9. Execution, Good Faith Effort, Other Agreements and Termination
Section 9.1. Execution
Section 9.2 Good Faith Effort
Section 9.3. Other Agreements
Section 9.4. Amendment and Termination

Article 10. Miscellaneous
Section 10.1. Waiver
Section 10.2. Survival

ARTICLE 1. DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. "Enforcement action" means any action taken by the appropriate regulatory authority whether civil, criminal, or administrative, to enforce applicable laws or regulations pursuant to its jurisdiction.

2. "Licensing state" means any state where a money transmitter is licensed.

3. "Lead state supervisor" means the state supervisor that takes a lead responsibility for an assigned money transmitter to the extent contemplated by this agreement.

4. "Money transmitter" means those entities as defined by appropriate state law which sell or issue payment instruments or transmit funds by wire or other means.

5. "Multi-state money transmitter" means a money transmitter that engages in the business of a money transmitter in two or more licensing states.

6. "State supervisor" means the state regulator with jurisdiction over the licensing and regulation of money transmitters.

7. "Supervisory information" means all information and reports compiled or drafted in the ordinary course of supervising and examining a money transmitter.

ARTICLE 2. STATEMENT OF PURPOSE

Section 2.1. Goals.

The purpose of this agreement is to promote a nationwide framework for cooperation and coordination among state money transmitter regulators that have concurrent jurisdiction over a regulated entity in a manner that conserves regulatory resources and minimizes the regulatory burden on supervised entities, consistent with each state attaining its supervisory objectives.

Section 2.2. Responsibilities.

The state supervisors sharing regulatory responsibility for a multi-state money transmitter will request one state supervisor to be the lead state supervisor of each multi-state money transmitter that the state supervisors determine should be supervised pursuant to this Agreement. State supervisors selected as lead state supervisors should indicate as soon as practical whether each assignment is accepted.

The lead state supervisor will act as a primary point of contact to the extent contemplated by this Agreement. The parties recognize that each state supervisor has the responsibility to monitor money transmitters that operate in the state supervisor's respective state and to ensure that those transmitters are operating in compliance with applicable state law within the state supervisor's jurisdiction. The lead state supervisor assumes no responsibility for the regulation or activities of multi-state money transmitters outside of the lead state. The lead state supervisor's role of coordinating regulatory efforts is meant to assist state supervisors in fulfilling their own regulatory responsibilities. Each licensing state recognizes that whatever assistance or information it may receive from this Agreement is meant to benefit the state system as a whole and that each state supervisor remains solely responsible for the decision to rely on such assistance or information and the consequences thereof in that licensing state. Accordingly, each licensing state agrees not to institute any type of action, either informal or formal, against a lead state with regard to matters addressed under this Agreement. The parties will cooperate to ensure that their respective material interests, authorities and responsibilities are met.

ARTICLE 3. INFORMATION SHARING

Section 3.1. Request for Information.

A state supervisor may request from another state supervisor supervisory information regarding a money transmitter that operates or proposes to operate in both states. The request shall be made in writing by the requesting state supervisor or the supervisor's designee.

A request should be specific as to the documents or information sought. The state supervisor shall limit its use of information obtained under this Agreement to purposes related to its supervisory authority.

Section 3.2. Providing Information.

To the extent permitted by law, state supervisors shall comply with a request for supervisory information within a reasonable time.

Section 3.3. Confidentiality.

Supervisory information shared under this Agreement is confidential unless otherwise specified by the originating authority. To the fullest extent permitted by law, the parties will give the same confidential treatment to information obtained pursuant to this Agreement that is provided by the laws of the originating authority.

Supervisory information shared under this Agreement is the property of the originating authority. It shall not be further disclosed by the recipient without the written permission of the originating authority, which shall apply its state law in determining to authorize such further disclosure. When its regulatory usefulness has ended, supervisory information obtained under this Agreement should be returned or destroyed unless the originating authority directs otherwise, and as permitted by applicable state record retention requirements.

In the event of termination of this Agreement, the signatory state supervisors agree that confidential information received remains confidential and will continue to be protected under the terms of this Agreement.

Section 3.4. Legal Process

On receipt of any legal process or request pursuant to a state's public information statute compelling record production, a state supervisor shall immediately notify the originating authority. The state supervisor shall use its best efforts in providing the originating authority an opportunity to challenge the release of the information. Lead state and licensing state supervisors shall cooperate in the preparation of any memoranda, request for protective order or pleadings deemed desirable by the originating authority to protect the confidentiality of supervisory information.

ARTICLE 4. RESPONSIBILITY FOR EXAMINATION

Section 4.1. Role of Lead State Supervisors.

To promote a single point of contact, the lead state supervisor shall be responsible for examining or coordinating the examination of all the money transmitters assigned to and accepted by the lead state. The lead state supervisor may, and is encouraged to, request the assistance of other licensing state examiners to assist in a joint examination of a multi-state money transmitter.

The lead state supervisor shall give notice to each relevant and known licensing state supervisor, who is a signatory of this Agreement, of the time and scope of an upcoming examination of a multi-state money transmitter. In determining when to request the assistance of the licensing state supervisors for such examinations, the lead state supervisor shall consider the efficiency of the examination and the interests of the regulatory system. The lead state is encouraged to include in joint examinations as broad a participation of licensing states examiners as is practical. However, any licensing state may perform its own examination concurrent with the lead state's examination, or in the alternative, at any other time if the licensing state examination cannot be scheduled concurrently with the lead state's examination.

The lead state supervisor shall designate the examiner-in-charge of such examination. The examiner-in-charge shall designate the responsibilities of each examiner. The examiners shall perform the responsibilities designated and promptly report the findings to the examiner-in-charge in the form requested, together with supporting work papers.

The lead state supervisor shall prepare the examination findings and advise the licensing state supervisors of the findings along with any appropriate recommendations.

Section 4.2. Role of Licensing State Supervisors.

The licensing state supervisors shall provide the lead state supervisor with guidance on the application of licensing state laws and regulations as necessary.

When requested by the lead state supervisor, the licensing state examiners may assist in joint examinations of multi-state money transmitters and participate in discussions with management. Licensing state supervisors may also perform examinations and/or engage in discussions with management concurrent with the lead state or at such other time as it desires if a concurrent examination and/or discussion cannot be scheduled.

The licensing state supervisors may keep copies of examination findings and supporting work papers they create while participating in the lead state supervisor's

examination. Before disclosing any supervisory information, the licensing state supervisors shall immediately notify the lead state supervisor of any legal process or other requests for supervisory information created while participating in the examinations. To provide the lead state supervisor with the opportunity to challenge the release of such supervisory information, the parties shall proceed in accordance with Section 3.4 of this Agreement.

A licensing state supervisor shall advise the lead state supervisor whenever the licensing state supervisor has reasonable cause to believe an examination of a multi-state money transmitter is necessary. If the lead state supervisor cannot conduct or coordinate the examination in a reasonable time, the licensing state supervisor may conduct the examination. A licensing state supervisor who conducts an examination under this provision shall, to the extent practical, observe the provisions of this Agreement otherwise governing a lead state supervisor conducting an examination.

Section 4.3. Planning and Scheduling.

The lead state supervisor, in consultation with licensing state supervisors, shall schedule its regular examinations of assigned multi-state money transmitters. Each lead state supervisor shall furnish its schedule for examinations to each relevant licensing state supervisor together with the lead state supervisor's anticipated request for licensing state supervisors' assistance in conducting the examinations. To the extent permitted by state law, licensing states should inform the lead state of licensing state laws or issues that the lead state may wish to incorporate into the examination or whether such licensing state intends to perform its own examination .

Section 4.4. Efficient Use of State Resources.

If the lead state supervisor determines to involve the licensing state supervisor(s) in an examination, to facilitate efficiencies in the examination the supervisors may enter into separate agreements governing the sharing of resources and compensation for services rendered to the extent permitted by the laws of their respective jurisdictions.

ARTICLE 5. ENFORCEMENT ACTIONS

Section 5.1. Lead State Notification and Action.

The lead state supervisor in consultation with licensing state supervisors shall use its best efforts to coordinate, to the degree the lead state deems appropriate, enforcement actions against a multi-state money transmitter. The lead state supervisor shall use its best efforts to notify all relevant licensing state supervisors of any enforcement action, formal or informal, taken against a multi-state money transmitter to the fullest extent permitted by law. If possible, notification by the lead state supervisor will be given in advance of the enforcement action. The lead state and licensing states are encouraged to coordinate enforcement actions to the extent permitted by applicable law and in consideration of the interests of the regulatory system.

Section 5.2. Actions by Licensing State.

Notwithstanding Section 5.1., the licensing state supervisor may, upon reasonable notice to the lead state supervisor, take any enforcement action against a multi-state money transmitter, permitted under licensing state law.

ARTICLE 6. APPLICABLE LAWS

The parties recognize that neither lead nor licensing state supervisors may be empowered to waive provisions of their respective laws directly applicable to multi-state money transmitters. To the extent consistent with lead and licensing state laws, the parties agree to make efforts to apply their respective laws and regulations in a manner that will promote consistency throughout the state system in order to reduce regulatory burden while maintaining effective and efficient regulation and supervision.

ARTICLE 7. APPLICATIONS

Section 7.1. Approval Authority.

The licensing state supervisor shall have approval authority over all applications in such licensing state for a money transmitter license or for such other money transmitter activities that may be granted.

ARTICLE 8. PARTIES

Section 8.1. Representations and Warranties.

Consistent with state law, state supervisors may enter into this agreement and shall be deemed to be acting within the scope of the signatory state supervisor's authority.

Section 8.2 Change in Power or Authority.

Any material change in the authority of any signatory state supervisor to perform this Agreement shall require notice of such change to the other signatory state supervisors.

ARTICLE 9. EXECUTION, GOOD FAITH EFFORT, OTHER AGREEMENTS AND TERMINATION

Section 9.1 Execution.

The terms of this Agreement shall become effective when a state supervisor has executed the original or a counterpart signature page. Additional parties may sign after the initial execution of this document.

As soon as practicable after signing this Agreement, each state supervisor will advise the other signatories of the appropriate officials to contact for purposes of notices and exchanges of information covered by this Agreement and will update such information as appropriate.

Section 9.2. Good Faith Effort.

The parties will make all good faith efforts to achieve the goals of this Agreement and to encourage cooperation.

Section 9.3. Other Agreements.

This Agreement is not intended to prevent the parties from entering into other agreements with individual parties, other supervisors, or individual money transmitters regarding the subject matter of this Agreement.

Section 9.4. Amendment and Termination.

This Agreement may be amended by a written instrument signed by each of the signatory state supervisors.

Any party to this Agreement may withdraw from the Agreement by giving written notice of withdrawal to all other parties. The withdrawal of any party shall end the participation of the respective signatory state supervisor 90 days after the date of withdrawal unless the remaining parties waive the 90 day notice period.

ARTICLE 10. MISCELLANEOUS

Section 10.1. Waiver.

The waiver by any state supervisor of the performance of any provision of this Agreement shall not invalidate this Agreement, nor shall it be considered a waiver of any other provision.

Section 10.2. Survival.

This Agreement shall survive any change in the state supervisor that has jurisdiction over any money transmitter.

CARTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA

CARTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA

I. Antecedentes.

1. Al presente ciertas entidades bancarias organizadas bajo las leyes de la República de Guatemala, realizan actividades financieras en Puerto Rico, a través de Establecimientos Transfronterizos.

2. Las entidades bancarias y financieras organizadas en Puerto Rico pueden realizar actividades financieras en la República de Guatemala de manera similar a la descrita en el párrafo anterior, llenando para el efecto, los requisitos legales correspondientes.

3. Considerando lo anterior, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la "OCIF") y la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala (la "SB", colectivamente, los "organismos de supervisión y control") estiman conveniente y beneficioso consignar en esta carta su intención de cooperar para conseguir una adecuada supervisión de las entidades bajo su jurisdicción y los establecimientos de éstas que la legislación interna de cada país somete a su control.

4. Al otorgar esta Carta, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala comparecen en este acto dentro del ámbito de sus respectivas facultades legales.

5. A tal fin, los organismos de supervisión y control antes señalados acuerdan establecer una relación de mutua cooperación en los términos que se establecen a continuación.

II. Definiciones

Con el propósito de uniformar tratamientos y para efectos de aplicación de la presente Carta de Cooperación, ambas instituciones convienen en utilizar las siguientes definiciones:

- País de Origen: País donde está ubicada la casa matriz de la entidad bancaria o financiera.

- País Anfitrión: País en donde están ubicados los Establecimientos Transfronterizos.

- Establecimiento Transfronterizo: Establecimiento cuya figura legal es reconocida en ambos países, constituido en el País Anfitrión, por una entidad bancaria o financiera del País de Origen.

III. Distribución General de Responsabilidades

1. Los antedichos organismos de supervisión y control fundamentan la suscripción del presente documento en los principios adoptados en mayo de 1983 por el Comité de Supervisión de Basilea, en el documento denominado "Principios para la Supervisión de los Establecimientos Bancarios en el Extranjero" y su desarrollo posterior, conocido como el "Concordato de Basilea".

2. A tenor con los principios del Concordato de Basilea, la OCIF y la SBG concurren con el rol que en dicho Concordato se asigna al organismo de supervisión y control del País de Origen y el que se le asigna al organismo de supervisión y control del País Anfitrión, sin menoscabo de las facultades que les otorgan sus respectivas legislaciones internas.

3. En los casos en que los Establecimientos Transfronterizos operantes en el País Anfitrión hayan constituido establecimientos transfronterizos en otros países, el órgano supervisor del País Anfitrión adquirirá, a su vez, la responsabilidad como supervisor del País de Origen en relación con dichos establecimientos.

IV. Cooperación e intercambio de información

1. Sin perjuicio de los detalles y especificaciones que se relacionan más adelante, ambas autoridades se comprometen a colaborar estrechamente en la consecución de los objetivos indicados en el punto anterior, para lo cual intercambiarán, por propia iniciativa o a petición de la otra parte, la información disponible legalmente que sea significativa y, en general, facilitarán, en la medida de sus facultades legales, el cumplimiento de sus respectivas funciones.

2. Ambas autoridades están interesadas en conocer la situación y evolución de los mercados financieros respectivos y la posición competitiva de las entidades bancarias o financieras con presencia en el otro país, así como de los Establecimientos Transfronterizos que forman parte de las mismas.

V. Confidencialidad de la información.

La información que se intercambie se utilizará únicamente a efectos de llevar a cabo la labor de supervisión bancaria o de entidades financieras y estará sujeta a las restricciones legales de la confidencialidad de asuntos financieros de acuerdo con las leyes y reglamentos existentes en cada país. En los Apéndices I y II de esta Carta se enumeran algunas de las disposiciones legales que gobiernan el asunto en cada país.

VI. Inspecciones "In situ"

1. Con carácter de excepcionalidad y subsidiaridad, y siempre que la legislación interna de cada país lo permita y exista común acuerdo entre las partes, el organismo supervisor del País de Origen podrá realizar inspecciones "in situ" a los Establecimientos Transfronterizos de entidades bancarias o financieras bajo su jurisdicción, ubicados en el País Anfitrión. En principio, esas inspecciones tendrán como objetivo fundamental el conocimiento del negocio del establecimiento y de su gestión general, así como el examen de la eficacia de los controles internos de la matriz y del propio establecimiento. En cada caso concreto que se presente, ambas autoridades fijarán la forma de llevar a cabo dichas inspecciones admitiendo la posibilidad de que, cuando sea aconsejable, se realicen de forma conjunta, con equipos mixtos, o actuando el organismo supervisor del País de Origen como invitado.

2. En cuanto a las inspecciones que el organismo supervisor del País Anfitrión realice a los Establecimientos Transfronterizos, éste se compromete a informar al organismo supervisor del País de Origen enviando un resumen de los aspectos más significativos del informe resultante.

VII. Aspectos relacionados con la autorización de establecimientos bancarios en el exterior.

1. Siempre que las leyes internas de cada país así lo establezcan, se velará porque la creación de Establecimientos Transfronterizos, o la adquisición de participaciones significativas, directas o indirectas, en una entidad ya existente, esté sujeta a la previa autorización de los respectivos organismos de control, o de quien legalmente corresponda.

2. El Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala exigen que las entidades matrices de los Establecimientos Transfronterizos constituidos en el otro país dispongan de información adecuadamente actualizada y fluida sobre la situación financiera de dichos establecimientos, sobre el nivel de riesgos y sobre el control y gestión de los mismos, tanto localmente como en el exterior.

3. Ambas autoridades manifiestan que someten a los Establecimientos Transfronterizos de entidades bancarias o financieras extranjeras a las mismas exigencias y tratamiento supervisor que las demás entidades bancarias o financieras autorizadas en el país. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas facultades legales, los organismos supervisores de las entidades matrices velarán porque los Establecimientos Transfronterizos de las mismas, se sometan a auditoría externa, preferiblemente por la misma firma que audite a la entidad matriz.

4. El Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala se consultarán libremente sobre cualquier aspecto y podrán solicitarse el intercambio de toda la información significativa en su poder relacionada con Establecimientos Transfronterizos de entidades bancarias o financieras cuya matriz está ubicada en el otro país, sujeto a lo dispuesto en el Artículo V de esta Carta, sobre la confidencialidad de la información.

VIII. Aspectos relacionados con otras entidades no-financieras.

En ambos países las participaciones de las entidades bancarias o financieras en empresas no-financieras están sujetas a ciertas prohibiciones y limitaciones. Los organismos de supervisión están interesados en que se les comunique cualquier información que llegue a su conocimiento sobre el tema.

IX. Contactos o reuniones de representantes de ambas autoridades.

Las personas encargadas de funciones de supervisión en ambos países podrán, en todo momento, solicitar asesoramiento y aclaraciones de la otra parte, así como la realización de las reuniones que se consideren necesarias.

X. Compromiso general de intercambio de información sobre los respectivos sistemas bancarios.

Ambas autoridades se comprometen a intercambiar y mantener actualizada toda información relevante sobre sus respectivos sistemas bancarios, sobre la normativa aplicable y sobre las políticas nacionales de supervisión.

XI. Apoyo institucional.

Como parte de esta Carta de Cooperación, el Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala realizarán sus mejores esfuerzos para mantener una cooperación interinstitucional que posibilite la realización de pasantías de sus funcionarios, el desarrollo de cursos y seminarios, así

como la provisión mutua de asesoramiento por parte de funcionarios en áreas que puedan ser requeridas.

XII. Reciprocidad y actualización del documento.

Con la suscripción del presente documento ambas autoridades acuerdan que su contenido se aplicará recíprocamente y que la Carta será revisada para su adecuada adaptación y actualización, siempre que sea necesario o a petición de cualquiera de las partes, especialmente cuando se produzcan cambios sustanciales en la legislación financiera de alguno de los países que la suscriben.

XIII. Vigencia y otorgamiento.

Esta Carta de Cooperación entrará en vigor un día después de su firma por ambas partes. Para el efecto, se firma en dos (2) ejemplares originales idénticos, en la forma siguiente:

1) Por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 14 de marzo de 2002

Antonio Faría
Comisionado de Instituciones Financieras

2) Por la Superintendencia de Bancos de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 14 de marzo de 2002

Douglas O. Borja Vielman
Superintendente de Bancos

APÉNDICE I.

Algunas disposiciones legales vigentes en Guatemala sobre la confidencialidad de asuntos financieros y examen de instituciones financieras

1. En la República de Guatemala, de conformidad con los artículos 30 de la Constitución Política de la República y 49 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos tiene limitaciones para otorgar información obtenida en el ejercicio de sus funciones, según se transcribe a continuación:

Constitución Política de la República:

"Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo los informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, ***salvo que se trate de*** *asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de* ***datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.****" (El resaltado no aparece en el texto original).*

Segundo párrafo del artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala:

*"Artículo 49. ... **Las informaciones de particulares obtenidas por la Superintendencia de Bancos, en el ejercicio de sus funciones**, incluyendo de accionistas, directores, funcionarios y empleados de las entidades sujetas a su vigilancia e inspección, **serán estrictamente confidenciales, por considerarse datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia**. En consecuencia, las autoridades, funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos no podrán revelar ni comentar los datos obtenidos, ni los hechos observados, salvo que medie orden de juez competente." (El resaltado no aparece en el texto original).*

Intercambio de información entre supervisores

2. Al respecto, el artículo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros tiene contemplado que, para la autorización del establecimiento en el país de una sucursal de banco extranjero deberá considerarse entre otros aspectos, que pueda efectuarse intercambio de información institucional con el supervisor del banco matriz. En igual forma, el artículo 14 de la citada Ley establece que los bancos nacionales podrán establecer sucursales en el extranjero para lo cual se exigirá el consentimiento de la autoridad supervisora del País Anfitrión para realizar intercambios de información.

Sobre inspecciones "in situ"

3. Los artículos 133 de la Constitución Política de la República y 43 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala estipulan que la Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demás que la ley disponga.

4. Por su parte, el inciso c) del artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, establece como atribución del órgano supervisor la de realizar la vigilancia e inspección con las más amplias facultades de investigación de conformidad con la ley, para lo cual en el artículo 49 de la ley citada se dispone que las entidades sujetas a su vigilancia e inspección están obligadas a poner a su disposición las informaciones sobre las operaciones, actos y negocios que tales entidades realicen, así como presentar los libros, registros y documentos contables relacionados con el giro del negocio bancario que les solicite, dentro de los plazos que les fije, sujeto a las disposiciones sobre confidencialidad de la información indicadas en el numeral 1 de este Apéndice.

5. A su vez, el artículo 5 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, indica que los bancos, las sociedades financieras, los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, los grupos financieros, y las empresas que conforman a estos últimos, y las oficinas de representación de bancos extranjeros se regirán, en su orden, por sus leyes específicas, por la presente ley, por las disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y, en lo que fuere aplicable la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria.

APÉNDICE II.

Algunas disposiciones legales vigentes en Puerto Rico sobre la confidencialidad de asuntos financieros y examen de instituciones financieras.

1. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es parte del sistema constitucional de los Estados Unidos de América. Dentro de dicho sistema constitucional, Puerto Rico puede entrar en acuerdos o convenios ejecutivos con otros países siempre que dichos acuerdos no interfieran con la política nacional de los Estados Unidos.

2. Los Estados Unidos de América, a su vez, son miembros del Comité de Basilea para Supervisión Bancaria y signatarios del Concordato de Basilea de 1983.

3. Al estar insuflada por los principios del Concordato de Basilea, esta Carta adelanta los principios de supervisión bancaria adoptados por los Estados Unidos de América como parte de su esquema para la supervisión de entidades financieras internacionales.

4. En Puerto Rico, en sintonía con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 inciso (a)(15) de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras" (la "Ley 4"), el Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene poderes y facultades para otorgar contratos o convenios de cooperación con otras jurisdicciones para, entre otras cosas, llevar a cabo exámenes conjuntos y, no obstante lo dispuesto en el Artículo 20(d) de dicha Ley 4, compartir información confidencial recopilada en los exámenes de instituciones financieras, compartir con cualquier otra agencia supervisora de instituciones financieras de cualquier otra

jurisdicción, o cualquier organización afiliada con, o representando a, una o más agencias supervisoras de instituciones financieras. A tenor con lo dispuesto en dicho Artículo 10(a)(15), el Comisionado obtendrá de dicha agencia supervisora un compromiso de mantener el carácter confidencial de tal información, hasta donde sea permisible bajo la Ley 4 o cualquier otra ley aplicable.

5. Bajo la Sección 28(h) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmienda, conocida como la "Ley de Bancos" (la "Ley 55"), los informes que rinden los examinadores del Comisionado de Instituciones Financieras en relación con el examen practicado a cualquier banco o banco extranjero serán de carácter confidencial, excepto para la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o una comisión nombrada por ésta o para las demás agencias supervisoras del banco, según definidas. Se dispone que los asesores legales o financieros de la Junta de Directores y los auditores externos de un banco estarán excluidos del alcance de la mencionada sección y tendrán acceso a dichos informes, sujeto a los mismos requerimientos de confidencialidad a los que están sujetos los miembros de la junta de directores de un banco.

6. La Ley Núm. 52 de 11 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional" (la "Ley 52") dispone que la información provista por una entidad bancaria internacional al Comisionado de Instituciones Financieras bajo dicha Ley 52 y los reglamentos adoptados por el Comisionado al amparo de la misma, deberá mantenerse confidencial, excepto: (i) cuando la divulgación de dicha información sea requerida por ley u orden judicial, o (ii) por requerimiento formal de una agencia gubernamental doméstica o foránea en el curso del ejercicio de su función supervisora cuando el Comisionado tenga motivos fundados para entender que su

divulgación redunda en pro del mejor interés público. En tal caso, la información se entregará a la agencia gubernamental concernida bajo un acuerdo obligatorio de mantener el carácter confidencial de tal información. Disponiéndose, que la excepción contemplada en el número (ii) anterior no se extenderá en ningún caso a información sobre los clientes de la entidad bancaria internacional.

Sobre Inspecciones "in situ"

7. De conformidad con el Artículo 3 de la Ley 4, el Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene, entre otras funciones dispuestas en dicha ley, la responsabilidad primordial de fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operan o hacen negocios en Puerto Rico. Bajo el Artículo 10(a)(12)(l) de la Ley 4, el Comisionado de Instituciones Financieras tiene el poder y facultad para llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten cualquier rama de la industria financiera, para los cuales podrá requerir la información que sea necesaria y pertinente para lograr tales propósitos.

8. Bajo la Sección 28 de la Ley 55, la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es que los negocios de todos los bancos e instituciones bancarias organizadas bajo las leyes de Puerto Rico y de los bancos e instituciones bancarias extranjeras que operan en Puerto Rico sean inspeccionados y regulados por el Comisionado de Instituciones Financieras para asegurar la operación prudente de dichos negocios y de ese modo proteger el interés público y los intereses de los depositantes, acreedores y accionistas. Bajo la citada Sección 28, todo banco o banco extranjero y toda sucursal u oficina de

banco extranjero que hiciere negocios en Puerto Rico, está sujeto a la inspección y supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras.

9. Bajo la Sección 3(a)(6) de la Ley 52 el Comisionado de Instituciones Financieras tiene el deber de supervisar, fiscalizar y auditar las entidades bancarias internacionales. Además, el Reglamento Número 5653 titulado "Reglamento del Centro Bancario Internacional" establece en su Artículo 11(1)(c) que toda entidad bancaria internacional estará sujeta a la inspección y supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras, quien examinará sus operaciones.

APÉNDICE III
Definición de Información Significativa

En términos generales, el concepto de "información significativa" está insuflado por los principios para la supervisión en el extranjero de bancos con operaciones internacionales, según contenidos en el Concordato de Basilea de 1983.

Para propósitos de implementar lo pactado en el primer párrafo del apartado IV "Cooperación e intercambio de información", de esta Carta de Cooperación, sobre la frase "información disponible legalmente que sea significativa..." ésta se refiere, como mínimo, a los siguientes renglones de información, siempre y cuando, de acuerdo con las leyes de cada país, la misma pueda darse a conocer a la autoridad supervisora del País de Origen o del País Anfitrión, según sea el caso:

1. Cualquier información sobre problemas serios que la institución extranjera enfrenta en el País Anfitrión.
2. Cualquier información sobre problemas serios que la institución o su matriz enfrenta en el País de Origen.
3. Cualquier información sobre problemas en la matriz o afiliadas del banco o institución financiera con operaciones en el País Anfitrión que, en la opinión de la autoridad supervisora del País de Origen, afectaría las operaciones de la entidad que opera en el País Anfitrión.
4. Cualquier información sobre la solidez, solvencia, liquidez, y posiciones de riesgo asumidas en las operaciones de la entidad bancaria o financiera de que se trate.
5. A tono con los principios de supervisión consolidada consignados en el Concordato de Basilea, adoptados en la Carta de Cooperación, "información significativa" incluye toda

información sobre concentraciones de riesgo, calidad de activos y adecuación del capital del banco o grupo financiero, tanto en el País de Origen como País Anfitrión.

6. "Información significativa" incluye también aquella información que, de conocerse, llevaría a cualquiera de las autoridades reguladoras a tomar las acciones preventivas o correctivas correspondientes bajo las leyes de sus respectivas jurisdicciones.
7. En general, "información significativa" incluye cualquier tipo de información que, en la opinión de la autoridad supervisora del País de Origen o del País Anfitrión, afecta la operación prudente de dichos negocios o atenta contra los intereses de los depositantes, acreedores o accionistas de la entidad bancaria objeto a la supervisión conjunta de los países que suscriben la Carta de Cooperación.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

ANTONIO FARÍA
Comisionado

MEMORANDO

A: **Carmen Gandarilla**

De: **Antonio F. Faría**

Fecha: **20 de marzo de 2002**

Asunto: **Carta de Cooperación del Comisionado de Instituciones Financieras y el Superintendente de Bancos de Guatemala**

Adjunto original de carta de cooperación debidamente firmado por el Superintendente de Bancos de Guatemala, el Sr. Douglas O. Borja Vielman y yo el 14 de marzo de 2002 en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

Agradeceré su registro y archivo.

PO BOX 11855 SAN JUAN PUERTO RICO 00910-3855 | Tel. 787-723-8004 | e-mail: afaria@cif.gov.pr | www.cif.gov.pr

RATIFICACIÓN DE OBLIGACIONES BAJO LA CARTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA

YO, Carlos Armando Perez R., por la presente reconozco como sigue:

1. Que he sido informado de la existencia de Carta de Cooperación entre la Oficina del Comisionado de instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de Guatemala (la "Carta").

2. Que al presente soy un oficial, empleado o agente autorizado de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y que, como tal, y a tenor con lo dispuesto en la Carta he sido destacado para participar en gestiones de examen e investigación (las "Gestiones") en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionadas a Occidente Internacional Corporation, una subsidiaria licenciada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de Banco de Occidente, S.A., un banco licenciado en la República de Guatemala comenzando el 1 de marzo de 2004.

3. Con mayor especificidad, reconozco que la Carta estipula en su Sección V que la información recabada en las Gestiones gozará de confidencialidad, en este caso, bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

4. Dado lo anterior, por este medio, ratifico en mi carácter personal la obligación de confidencialidad establecida en la antedicha Carta. Me comprometo a no divulgar la información que adquiera como parte de las Gestiones excepto bajo las disposiciones expresas de la Carta. No divulgaré información confidencial alguna que esté en poder de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y a la que acceda por cualquier causa que no esté específicamente relacionada a las Gestiones.

Firmado, hoy 1 de marzo de 2004 en San Juan, Puerto Rico.

Firma _____

Título Subdirector Supervisión Bancaria

RATIFICACIÓN DE OBLIGACIONES BAJO LA CARTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA

YO, José Guillermo Pineda Sánchez, por la presente reconozco como sigue:

1. Que he sido informado de la existencia de Carta de Cooperación entre la Oficina del Comisionado de instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos de Guatemala (la "Carta").

2. Que al presente soy un oficial, empleado o agente autorizado de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y que, como tal, y a tenor con lo dispuesto en la Carta he sido destacado para participar en gestiones de examen e investigación (las "Gestiones") en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionadas a Occidente Internacional Corporation, una subsidiaria licenciada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de Banco de Occidente, S.A., un banco licenciado en la República de Guatemala comenzando el 1 de marzo de 2004.

3. Con mayor especificidad, reconozco que la Carta estipula en su Sección V que la información recabada en las Gestiones gozará de confidencialidad, en este caso, bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

4. Dado lo anterior, por este medio, ratifico en mi carácter personal la obligación de confidencialidad establecida en la antedicha Carta. Me comprometo a no divulgar la información que adquiera como parte de las Gestiones excepto bajo las disposiciones expresas de la Carta. No divulgaré información confidencial alguna que esté en poder de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y a la que acceda por cualquier causa que no esté específicamente relacionada a las Gestiones.

Firmado, hoy 1 de marzo de 2004 en San Juan, Puerto Rico.

Firma _____

Título Intendente Análisis y Supervisión

PARA RÉCORD:

En el día de hoy, jueves 12 de febrero de 2004, a la 1:30 de la tarde, se sostuvo una conferencia telefónica con el Lic. Edgard Barquín, segundo en mando de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala. El propósito de dicha conferencia telefónica fue informarle directamente a dicha superintendencia de la situación relacionada al Sr. Carlos Soto, de la firma de Morgan Stanley,

Según nuestros expedientes el señor Soto es miembro de la Junta de Directores del Banco de Occidente.

El señor Barquín nos informó que en la mañana de hoy el Presidente del Banco de Occidente le había informado lo mismo a la Superintendencia de Bancos.

A tenor con la carta de cooperación otorgada entre Guatemala y Puerto Rico, ésta la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala acordaron en mantenerse en comunicación y cualquier información que se descubra sobre la situación antes mencionada.

El Sr. Antonio Salva, Subcomisionado y la Lcda. Ana Marta Bird, asesora legal externa, estuvieron presentes en dicha comunicación telefonica.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

GUATEMALA, C. A.

OFICIO 876-2004

26 de febrero de 2004

Doctor
Alfredo Padilla
Comisionado de Instituciones Financieras
San Juan, Puerto Rico

Señor Comisionado:

Atentamente hago de su apreciable conocimiento que este Despacho ha designado a los licenciados José Guillermo Pineda Sánchez, Intendente de Análisis y Supervisión, y Carlos Armando Pérez Ruiz, Subdirector de Supervisión, para realizar trabajos de investigación relacionados con la entidad fuera de plaza Occidente International Corporation en Puerto Rico, derivado del presunto fraude cometido por el señor Carlos Soto. Dichos funcionarios estarán en la semana del 1 al 5 de marzo del año en curso.

El propósito de la visita es determinar el grado de exposición de la mencionada entidad fuera de plaza y la probabilidad de recuperabilidad de la inversión en riesgo, lo que nos servirá de base para establecer el grado de exposición del grupo financiero en su conjunto.

En virtud de lo anterior, agradeceré su valiosa ayuda en el sentido de compartir la información que su institución pueda tener y realizar los contactos con otras instituciones que se estime conveniente visitar.

Sin otro particular, aprovecho para expresarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Douglas O. Borja Vielman
Superintendente de Bancos

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA

9ª. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
Teléfono (502) 232-0001, 232-0003 y 232-0004, Fax (502) 232-0002

Asensio Andrade & Asociados
ABOGADOS Y NOTARIOS

JORGE ASENSIO AGUIRRE
IGNACIO ANDRADE AYCINENA
LUIS ENRIQUE SOLARES LARRAVE
MARIBEL VIAU MOLLINEDO
ROSA MARÍA MONTENEGRO DE GAROZ
VIRGINIA SERVENT PALMIERI
VIRGINIA FIGUEROA OVALLE
ANNABELLA GAMALERO CORDERO
SELINA MARIA PALMIERI GIRON

7a. AVENIDA 5-10, ZONA 4, GUATEMALA, C.A. 01004
CENTRO FINANCIERO TORRE I, 10o. NIVEL, OFICINA 3
TELS.: (502) 331-8168, 334-5112, 334-7865
FAX: (502) 331-3706
E-MAIL: bufeteaa@intelnet.net.gt

City of Guatemala, Guatemala
February 25, 2004

Dr. Alfredo Padilla
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
P.O. Box 11855, San Juan, Puerto Rico, 00910-3855

Dear Mr. Commissioner,

This is to report that Grupo Financiero de Occidente, a financial group organized and existent under the laws of the Republic of Guatemala, includes within its members Occidente International Corporation and Occidente Corporation USA. The former is a corporation organized in accordance with the laws of the associated state of Puerto Rico, holder of an international banking license issued by the Commissioner of Financial Institutions of San Juan Puerto Rico, license 36-EBI, dated June 14, 2002. Its headquarters are located on Home Mortgage Plaza, Suite 1002, 268 Ponce de Leon Blvd, Hato Rey, Puerto Rico, 00918. The latter, Occidente Corporation USA, is a company existent under the laws of the State of California, incorporated on October 29, 1998, and holder of an international banking license issued by the Commissioner of Financial Institutions of the State of California on January 13, 1999. Its headquarters are located on 741 South Vermont Avenue, Los Angeles, California, 9005.

To the best of our knowledge, both banking institutions, Occidente International Corporation and Occidente Corporation USA are providing financial services in USA and moving funds between the mentioned states and the Republic of Guatemala.

Other members of the financial group, Banco de Occidente S.A. (the bank), Seguros de Occidente S.A. (the insurance company) and Financiera de Occidente S.A. (the trust company) are subject to administrative, judicial and diplomatic complaints in the Republic of Guatemala, and in the Republic of El Salvador an administrative complaint was filed against the insurance company.

In the Circuit Court of the Sixth Circuit in and for the Guatemala department, Republic of Guatemala, Civil & Commercial Division, Case No. C2-2004-623, Generadora Electrica del Norte Limitada vs Seguros de Occidente, the judge on January 28, 2004 ordered, the appointment of a receiver.

Taking into consideration that the instituted actions are going to affect the financial group, and may affect potentially United States interests through the two American banking institutions, we hereby notified the above facts for whatever actions, in lieu of the facts, the comptroller may deem pertinent or appropriate.

Respectfully submitted,

Ignacio Andrade Aycinena
Attorney at Law

DHL WORLDWIDE EXPRESS

Rastree este envío por medio de la Internet http://www.dhl.com

Mencione este número de Envío para consultar

GUIA AEREA
(No negociable)

6 5 9 8 7 1 2 2 6 0

ORIGEN GTI

CÓDIGO DE DESTINO: SJU

6598712260

1 Número de cuenta y seguro del envío

Cobrar al ☐ Remitente ☐ Destinatario ☐ Tercero

[redacted]

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Seguro del Envío ver al Reverso

☐ Sí, valor asegurado (en moneda local) _____

No todas las formas de pago están disponibles en todos los países

2 Enviado por (remitente)

No. de cuenta: 704/046841

Nombre del remitente:

Referencia del remitente (en la factura aparecerán los 12 primeros caracteres)

IGNACIO ANDRADE AYCINENA

7 AVENIDA 5-10, ZONA 4
TORRE I NIVEL 10 OFICINA 3
GUATEMALA GUATEMALA

Código postal: 01004

Teléfono/Fax/Correo electrónico (requerido): T502 334-7865

3 Para (Destinatario)

OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
P.O.Box 11855,
San Juan, Puerto Rico, 00910-3855

Código postal:

PUERTO RICO

Persona a contactar: Dr. Alfredo Padilla

Teléfono/Fax/Correo electrónico (requerido): (787)-723-3131

4 Detalles del envío

No. de piezas	Peso total	Dimensiones: Piezas	Largo	Ancho	Alto
1	0.5 kg	@	x	x	
		@	x	x	
		@	x	x	
		@	x	x	

5 Detalles del envío

Descripción del contenido y cantidad

DOCUMENTOS (GENOR)

6 Sólo envíos por aduana (WPX)

Adjuntar el original y tres copias de la factura proforma o Comercial

Número de Licencia de Exportación (si aplica) | No. IVA/GST del Remitente

Valor declarado indicar moneda | Código aduanero concertado para el producto si se aplica

TIPO DE EXPORTACIÓN ☐ PERMANENTE ☐ REPARACIÓN/DEVOLUCIÓN ☐ TEMPORAL

Impuestos/derechos de destino (Si se deja en blanco, el destinatario los paga)

☐ Destinatario ☐ Remitente ☐ Otro ..... Especifique el No. de cuenta aprobado y facilitado

7 Autorización y firma del remitente

Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de DHL y limitan la responsabilidad de DHL. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia y/o el Convenio de Montreal (ver al reverso)

Firma: Karin Pineda Fecha: 25/02/04

6181-4991-2225 RUN 12-02

8 Productos y Servicios

DHL Worldwide Express: ☐ Sujeto a Derechos ☐ No Sujeto a Derechos ☐ Expreso Envelope (Pdg)

Domestic Post Global Mail: ☐ Priority ☐ Standard ☐ Other

Otros productos: ☐ WORLDMAIL ☐ Domestico ☐ Otros

Opciones de servicio, se puede aplicar cargos adicionales: ☐ Entrega el sábado ☐ Recogida especial ☐ Notificación de entrega

Otro

PESO FACTURABLE / VOLUMETRICO kg

CARGOS servicios

Otros

Seguro

VAT

CODIGO DE MONEDA | TOTAL

No. DE ETIQUETA TRANSPORTE POR COBRAR

[redacted]

RECOGIDO POR: M.

Ruta No.: 1600

Hora: Fecha: 250204

Copia Del Consignatario

AB0070

COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Alfredo Padilla

Comisionado

Record

Con relación a esta carta la cual nos fue enviada primero vía fax, conversamos con la Sup. de Bancos de Guatemala quien nos dio una explicación detallada del litigio. Nos indicaron que el 50% del riesgo está respaldado en una compañía de bonos.

3/01

2003

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE US DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AND THE COMMISSIONER OF FINANCIAL INSTITUTIONS OF PUERTO RICO

PURPOSE

This Memorandum of Understanding (**MOU**) between the U.S. Department of Housing & Urban Development (**HUD**) and the Office of the Commissioner of Financial Institutions of Puerto Rico (**OCFI**) identifies the areas of responsibilities of each of the above agencies in cases involving possible mortgage fraud and mortgagee practices that may not comply with statutory, regulatory, and administrative loan origination and servicing requirements.

BACKGROUND

Mortgage fraud and non-compliance with loan origination and servicing requirements are common concerns at both the Federal and state/local levels. At the Federal level with FHA- insured mortgages, HUD is committed to identifying fraud and non-compliance and taking corrective measures to protect the public trust. At the state/local level, OCFI has, among others, the responsibility of controlling and supervising financial institutions, including mortgage institutions that operate or do business in the Commonwealth of Puerto Rico. The two parties agree that an effective strategy to address these common concerns must include a joint effort.

Pursuant to article 10 (15) of Act Number 4 dated October 11, 1985 (Act), as amended, the Commissioner of Financial Institutions (the "Commissioner") may enter into contracts or cooperative agreements with other jurisdictions to, among other things, perform joint examinations and share confidential information.

GOAL

Whenever possible, the two parties in this MOU will coordinate their respective investigations, audits, and/or reviews to assist each other in fulfilling its own mission and responsibilities. To that end, there will be information sharing and case referrals. In addition, to the extent possible, there will be a sharing of expertise and investigative resources.

IMPLEMENTATION

HUD and OCFI may develop and exchange additional instructions and operating procedures that may be deemed necessary to the continued implementation of this MOU. Such instructions and operating procedures shall be subject to the approval of the two parties.

RESPONSIBILITIES

HUD will have reviewing jurisdiction for all possible Federal violations involving mortgage fraud and non-compliance. HUD will coordinate this reviewing responsibility with OCFI. In addition, HUD will:

- Share information with OCFI, either on its own initiative or at the request of OCFI, including those of a confidential nature.

- Facilitate the referral of cases from OCFI where HUD has reviewing responsibility by:

  - Establishing and maintaining a case referral program that will identify cases which merit a Federal response from HUD.
  - Designing and producing a Case Referral Form for the OCFI that will be utilized as the primary mechanism for the efficient and effective referral and tracking of cases to HUD.

- Maintain the confidential nature of such type of information provided by OCFI.

- Require that any such shared information of a confidential nature originated by OCFI not be released to a third party without prior written approval from OCFI.

The above obligations are subject to the Freedom of Information Act, Privacy Act, and other applicable Federal laws relating to disclosure of information and confidentiality.

OCFI is responsible for controlling and supervising financial institutions that operate or do business in the Commonwealth of Puerto Rico. As part of that responsibility, OCFI will:

- Share information with HUD, either on its own initiative or at the request of HUD, including those of a confidential nature.

- Refer to HUD all cases where OCFI believes there is sufficient evidence that a Federal violation may have occurred.

- Utilize the Case Referral Form developed by HUD for OCFI.

- Assist HUD in any case referred by OCFI. The referral of a case shall not have any effect on the ability of OCFI to continue its controlling and supervising responsibilities.

- Maintain the confidential nature of such type of information provided by HUD.

- Require that any such shared information of a confidential nature originated by HUD not be released to a third party without prior written approval form HUD.

The above obligations are subject to the Freedom of Information Act and other applicable Commonwealth laws relating to disclosure of information and confidentiality.

OCFI is concerned that certain mortgage lenders may employ deceptive sales practices to target financially unsophisticated borrowers. Notwithstanding the fact that OCFI does not have primary jurisdiction to investigate the terms and conditions of mortgage loans in order to ascertain the fairness of such terms, whenever possible, OCFI will

- Refer to HUD any predatory lending practices OCFI may identify in its regular course of examining the financial institutions under its jurisdiction, whether undertaken by mortgage brokers, mortgage lenders, creditors, home improvements, banks, or other access to financing arrangements.

- Refer to HUD all cases where OCFI believes there is sufficient evidence that a Federal violation may have occurred.

- Utilize the Case Referral Form developed by HUD for OCFI.

- Assist HUD in any case referred by OCFI. The referral of a case shall not have any effect on the ability of OCFI to continue its controlling and supervising responsibilities.

- Maintain the confidential nature of such type of information provided by HUD.

- Require that any such shared information of a confidential nature originated by HUD not be released to a third party without prior written approval form HUD.

DISPUTES

Any dispute arising out of this MOU shall be resolved at the field level by the examiners/reviewers involved. When such resolution cannot be accomplished, the matter will be referred to the Commissioner and HUD's Home Ownership Center Director.

AMENDMENT

This MOU may be amended by deletion or modification of any provision contained herein or by addition of new provisions after written concurrence of both parties of the MOU.

TERMINATION

This MOU will remain in effect until terminated by any party to the MOU provided such notice of termination is in writing, signed by the appropriate agency official that approved the MOU, and sent to the other party.

APPROVAL

This MOU will take effect immediately upon the signing of this document by the appropriate officials below:

Alfredo Padilla Cintrón
Commissioner of Financial Institutions

2/6/03
Date

Charles Gardner
Director
HUD

2/6/03
Date

MEMORANDUM

OF

UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (hereinafter, the "MOU") constitutes an agreement voluntarily entered between the Office of the Commissioner of Financial Institutions ("OCFI") of the Commonwealth of Puerto Rico and the Bureau of Immigration and Customs Enforcement (ICE) formally Customs Services Office of Investigations.

Purpose & Mission

The purpose of this MOU is to establish a working arrangement for the ICE and the OCFI regarding referral and investigation of criminal matters of mutual interest with regard to money laundering and related financial crime investigations. This document will delineate the responsibilities of the participants, maximize inter-agency cooperation, and formalize relationships between the participating agencies for policy guidance, planning, training, public and media relations.

It is mutually agreed that a MOU be established to maximize the cooperation between the ICE and the OCFI to effectively combat money laundering and related financial crimes. It is further agreed that, to the extent that is legally possible, the participating agencies will coordinate their respective investigations and audits to assist each agency in fulfilling its mission and responsibilities by combining expertise and investigative resources to combat money laundering and related financial crimes in Puerto Rico. However, each agency will retain all rights and obligations under existing statutes and regulations and this agreement will not restrict the legal prerogatives of either agency.

Administration & Procedure

In accordance with the terms of this MOU, the ICE will establish and develop a case referral program with the OCFI for the benefit of each agency. The establishment of program involvement, and direction will be the

responsibility of the ICE Special Agent in Charge (SAIC) and the Commissioner of Financial Institutions (CFI), respectively.

A. Supervision

Each participating agency will designate a coordinator who will act as a liaison and coordinate the investigative efforts and activities of their assigned personnel.

B. Referrals

It is agreed that, the OCFI will, within a reasonable number of days after detection, refer to the ICE all cases where a reasonable suspicion of a violation of federal law arises involving money laundering and related financial crimes. In addition, to the extent legally permitted, the OCFI will fully assist the ICE in any case referred.

C. Investigative Exclusivity

It is agreed that all matters of concurrent jurisdiction over which the ICE demands, by means of written notice to the CFI, to be afforded priority or exclusivity in the handling of the investigation and enforcement proceedings will be subject to case by case negotiations with the Department of Justice of the Commonwealth of Puerto Rico ("the Justice Department").

It is incumbent on each agency to make proper internal notification regarding the existence of referred matters and areas of concern. It is further agreed that there is to be no unilateral action taken on the part of the ICE or the OCFI relating to money laundering or related financial crimes or other areas of concern without previous reasonable notice to the other agency. All law enforcement actions will be coordinated and collaboratively carried out.

D. Reports and Records

It is agreed that all investigative records related to matters of federal jurisdiction over which the ICE demanded and obtained from the Justice Department priority or exclusivity in the handling of the investigation and enforcement proceedings (hereinafter, the" ICE cases") will be maintained at an approved ICE location.

It is further agreed that in the ICE cases, all joint interviews of subjects or witnesses will be reported in ICE format. Placement of all or part of said information into participating agency files rests with the discretion of supervisory personnel of the concerned agencies. In the ICE cases, classified

information and/or documents containing information that identifies or tends to identify ICE informant will not be placed in the files of participating agencies unless appropriate ICE policy has been satisfied.

E. Prosecutions

All investigative procedures relating to the ICE cases are to conform to the requirements for federal prosecution. A determination will be made on a case-by-case basis whether the prosecution of referred cases will be at the commonwealth or federal level. This determination will be based on the evidence obtained and a consideration of which level of prosecution would be of the greatest benefit to the overall objectives of this MOU.

It is agreed that in the event that an investigation is developed in a matter not within the jurisdiction of the ICE, the ICE agrees to provide all relevant information in its possession to commonwealth and/or local authorities. It is likewise agreed that in the event that an investigation is developed in a matter not within the jurisdiction of the Commonwealth of Puerto Rico, the OCFI will endeavor to cause the Justice Department to provide all relevant information to the ICE. Whether to continue and/or conduct additional investigation of the commonwealth or local crimes involved will be at the sole discretion and direction of the respective commonwealth and local authorities.

F. Investigative Methods/Evidence

For cases assigned to an ICE Special Agent or in which ICE informants or cooperating witnesses are utilized, the parties agree to conform to federal standards concerning interview reporting, evidence collection, processing, storage, and electronic surveillance. The parties agree to utilize the legal standards applicable to each agency and federal standards pertaining to evidence handling and electronic surveillance activities to the greatest extent possible.

All evidence acquired during any joint investigation pertaining to ICE cases will be secured by the ICE in the evidence room at the San Juan ICE Field Office and, while under such custody, will be subject to federal rules and policies governing the submission, retrieval, and chain of custody of evidence. OCFI personnel will have access to the evidence in joint cases at the ICE office in accordance with federal rules and procedures.

G. Dispute Resolution

In cases of overlapping jurisdiction, the participating agencies agree to work in concert to achieve the objectives herein. It is expected that operational disputes, controversies, or problems will be addressed and resolved through the cooperation of assigned personnel. The parties agree to attempt to resolve any disputes at the field level first before referring the matter to the supervisory personnel of each agency for resolution.

H. Security of Investigations

It is recognized that investigations regarding money laundering and related financial crimes are inherently sensitive, inasmuch as they potentially involve the reputation and credibility of public and/or financial officials. Further, the security of such investigations is often vital to the case's success. For these reasons, the participating agencies agree that discussion of its cases must be restricted to a need-to-know basis.

Equipment

To the extent that is legally permissible for either agency, property of the ICE and the OCIF may be provided on a case-by-case basis when needed to conduct joint investigations and operations.

Liability

Each agency acknowledges that its liability, if any, for the negligent or wrongful acts or omissions committed by its employees is governed by applicable law. The parties agree that they will not be responsible or liable for acts performed by personnel or other member agencies during the duration of this MOU.

Each agency further acknowledges that the federal government does not contract or promise to consider indemnifying the individual member, substituting the United States as a party defendant in civil litigation, or providing representation to commonwealth and local law enforcement officers who cooperate with the ICE on an informal basis as part of their commonwealth or local duties.

Likewise, each agency acknowledges that in executing this MOU the government of the Commonwealth of Puerto Rico does not contract or

promise to consider the indemnification of any individual working for the federal government or federal enforcement agent or officer, or the ICE or any other federal agency involved with cases or matters handled pursuant to this MOU. The government of the Commonwealth of Puerto Rico will not provide legal representation to any individual working for the federal government or federal enforcement agent or ICE officer or related federal agencies.

Moreover, each agency acknowledges that pursuant to this MOU, the employees of the Commonwealth of Puerto Rico may only act in their official capacity and always within the scope of their official duties or functions. Each agency further acknowledges the legal limitations imposed by Puerto Rico Act No. 104 of June 29, 1955 as amended, generally known as the act governing suits or litigation's against the Commonwealth of Puerto Rico.

Media

All media releases and statements will be mutually agreed upon and jointly handled according to ICE and participating agency guidelines. The parties agree that information will only be disseminated to the media in accordance with the terms of this MOU.

Duration & Terms of Agreement

This MOU is executed for the sole purpose of documenting the understandings and agreements between and among the parties hereto in an effort to achieve a more effective and efficient cooperative inter-agency law enforcement body. Nothing in this MOU is intended to create, nor does it create, an enforceable legal right or private right of action.

This MOU constitutes the agreement between and among the participants hereto and will remain in effect for as long as the participants determine that the investigative needs exist. The duration of this Agreement begins April 25th, 2003 and is indefinite, depending on the continued desire of each agency to participate. This Agreement may be modified at any time by written consent of each participating agency; however, modifications will have no force and effect unless reduced to writing and signed by an authorized representative of each of the participating agencies. A participating agency may terminate its involvement at any time by providing a written notice to that effect to the other participating agency with at least thirty (30) days prior notice.

Signatories

The undersigned parties represent that they have authority to execute this Agreement on behalf of their respective agencies. By subscription of signatures below, the parties herewith acknowledge that they have read, understand, concur with, and will abide by the foregoing.

Manuel Oyola-Torres
Special Agent in Charge, San Juan
Bureau of Immigration and Customs
Enforcement

4/25/03
Date

Alfredo Padilla
Commissioner
Office of the Commissioner
of Financial Institutions

4/25/03
Date

EL NUEVO DIA / sábado, 26 de abril de 2003

Plan contra los delitos financieros

Por Carmen T. Casellas

End.ccasellas@elnuevodia.com

LA OFICINA del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) tomó ayer dos pasos importantes en sus esfuerzos de prevención y detección de crímenes financieros.

Por un lado, la agencia firmó un convenio interagencial con el Negociado Federal de Inmigración y Aduana (antes el Servicio de Aduanas) dirigido a coordinar los esfuerzos de ambas entidades en la investigación de blanqueo de fondos dinero y otros delitos que involucran dinero.

ADEMAS, EMITIO una carta circular a los dueños de franquicias de casinos exigiéndoles que certifiquen que están en cumplimiento con regulaciones y requisitos federales y de la Oficina de Instituciones Financieras, dirigidas a prevenir el lavado de dinero.

"Estamos tomando un rol proactivo, tratando de prevenir lo (que) pueda suceder en el futuro y ganando herramientas para supervisar mejor", dijo el comisionado, Alfredo Padilla.

Mediante el acuerdo de la Oficina con Aduanas, las dos entidades podrán colaborar muy de cerca cuando, por ejemplo, la OCIF encuentre en el curso de un examen y corrobore vía su investigación que ha habido transacciones tras las cuales hay blanqueo de dinero. Aduanas es la entidad federal que está tomando el liderato en la investigación de este tipo de crimen.

Padilla explicó que Aduanas traerá sus recursos a las investigaciones de la OCIF y ayudará a adiestrar su personal.

MANUEL OYOLA, a cargo de la Oficina de San Juan de Aduanas, dijo que "el convenio se firmó con el propósito exclusivo de documentar los acuerdos entre las dos agencias".

Por otro lado, la Oficina del Comisionado también tiene acuerdo similares con el Servicio de Correos, la Oficina de Investigaciones Federales y el Departamento de la Vivienda.

A la vez, la carta circular a los casinos involucra reglamentos ya en vigor que forman parte de la llamada Ley Patriótica de 2001. El objetivo es informar a los casinos de estas obligaciones y requerirles que certifiquen que están en cumplimiento, dijo Padilla.

Dicha certificación deberá hacerse en o antes del 31 de mayo del 2003. También se exige que los casinos establezcan programas para prevenir y combatir el lavado de fondos, tengan controles internos, lleven a cabo auditorías y adiestren a sus empleados al respecto.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE REPÚBLICA DOMINICANA Y LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO SOBRE CONSULTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Superintendencia de Valores de República Dominicana, representada por su titular el Señor Yván Rodríguez Batista en su calidad de Superintendente, y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por su titular, el Señor Alfredo Padilla Cintrón en su calidad de Comisionado de Instituciones Financieras, son conscientes de la importancia que reviste los mercados de valores como mecanismos idóneos dentro del proceso de asignación de sus recursos, ayudando de esta forma al desarrollo económico de los países.

Asimismo, los antedichos titulares concuerdan que la creciente globalización de los mercados de valores obliga a una asistencia técnica efectiva entre ambas Autoridades en todo aquello relacionado con su labor específica a fin de alcanzar mercados de valores cada vez más abiertos, sanos y eficientes en República Dominicana y en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Consideran igualmente que es importante establecer un sistema eficiente de comunicación respecto a todas las cuestiones relacionadas con la operación de sus respectivos mercados de valores.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, la Superintendencia de Valores de República Dominicana y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han decidido suscribir el presente Memorando de Entendimiento, con respecto a la consulta y la asistencia técnica a efectuarse en el futuro entre ambos organismos.

ARTÍCULO I: DEFINICIONES

Para los propósitos de este Memorando de Entendimiento:

1. "Autoridad"

(a.) La Superintendencia de Valores de República Dominicana;

(b.) El Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;

2. "Autoridad Solicitada" es el organismo al que se dirige la consulta o solicita asistencia técnica, bajo los términos de este Memorando de Entendimiento.

3. "Autoridad Solicitante" es el organismo que efectúa la consulta o solicita asistencia técnica, bajo los términos de este Memorando de Entendimiento.

ARTÍCULO II: CONSULTAS RELATIVAS A ASUNTOS DE INTERES MUTUO Y MEDIDAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS

Sección 1: Principios Generales para la Consulta y la Asistencia Técnica.

1. Las Autoridades consideran conveniente establecer un marco para incrementar la cooperación en todos los asuntos relacionados con las actividades de supervisión, regulación, operación de sus respectivos mercados y la protección de los inversionistas. Con ese propósito desean concertar medidas de asistencia técnica sobre bases de continuidad mejorando la comunicación y el mutuo entendimiento entre ellas.

2. Este acuerdo constituye una declaración de la intención de las Autoridades respecto a dicho marco de consulta y asistencia técnica. Las Autoridades se comprometen a mantener un diálogo regular y fluido sobre aspectos relacionados a la regulación, fiscalización, desarrollo y operatividad de sus respectivos mercados de valores.

3. Las Autoridades convienen en facilitarse mutuamente la información de que dispongan y que consideren de utilidad para la otra Autoridad.

4. Las Autoridades se comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar la máxima eficacia en la ejecución de asistencia, en aquellos supuestos en que la Autoridad Solicitada fuera competente para hacerlo con arreglo a las leyes a las que están sujetas.

5. Ambas Autoridades aceptan que la prestación efectiva de la asistencia técnica específica a que se refiere el presente Memorando de Entendimiento

estará sujeta a la disponibilidad de recursos de la Autoridad Solicitada, así como a las autorizaciones legales internas propias de cada jurisdicción. Si la Autoridad Solicitada tuviese que incurrir en costos sustanciales para responder al requerimiento de asistencia bajo esté Memorando de Entendimiento, las Autoridades convendrán previamente cómo se cubrirán dichos costos, antes de continuar respondiendo a dicho requerimiento de asistencia.

Sección 2: Consultas sobre Estabilidad, Eficiencia y Desarrollo de los Mercados.

Las Autoridades se proponen consultarse periódicamente sobre asuntos de interés mutuo, con miras a lograr la estabilidad, eficiencia y desarrollo de los Mercados de Valores de República Dominicana y de Puerto Rico. Tales consultas pueden abarcar, entre otros aspectos, el desarrollo de mercados de capitales, prácticas operativas, evolución de los sistemas de custodia, administración, compensación, liquidación y transferencia de valores y el establecimiento de otros sistemas de mercado, la coordinación de la vigilancia y supervisión del mercado y la aplicación de las leyes y reglamentación existentes en materia de valores en República Dominicana y Puerto Rico.

Sección 3: Disposiciones sobre Asistencia Técnica para el Desarrollo de los Mercados de Valores.

Las Autoridades se proponen efectuar consultas y asesorarse, con vistas a establecer e implantar programas de asistencia técnica dirigidos al desarrollo, administración y operación de sus respectivos Mercados de Valores. En todo caso deberá precisarse el tipo específico de asistencia técnica que las Autoridades soliciten, en términos razonables.

La asistencia podrá incluir, entre otros aspectos, la capacitación de personal, intercambio de información y asesoría sobre aspectos relativos a:

- Emisiones de valores;
- Sistemas de transmisiones de órdenes, verificación y registro de transacciones;
- Mecanismos de custodia, compensación, liquidación y transferencia de valores;
- Procedimientos y prácticas de protección a los inversionistas;
- Regulación y supervisión de los puestos de bolsa;

- Regulación y supervisión de las instituciones de inversión colectiva y los fondos que administren;
- Regulación y supervisión de las empresas calificadoras de riesgos;
- Estrategias de promoción y desarrollo del mercado de valores;
- Diseño de sistemas informáticos para el monitoreo en línea de las operaciones; y
- Otros temas vinculados con el Mercado de Valores.

ARTÍCULO III: CONSULTAS O PETICIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Sección 1: Contenido y Forma de la Solicitud

1. Las consultas o peticiones de asistencia técnica deben hacerse por escrito y dirigirse a la persona de enlace de la Autoridad Solicitada, indicada en el Anejo que forma parte del presente Memorando.

2. En las consultas o peticiones de asistencia técnica, la Autoridad especificará:

(a) La materia u objeto de la consulta o de la petición de asistencia técnica, así como su propósito;

(b) Una descripción general de la documentación, asistencia, información o declaración solicitada por la Autoridad Solicitante;

(c) La persona que posee la información solicitada o el lugar donde esa información puede ser obtenida, en caso de ser conocidos dichos datos por la Autoridad Solicitante;

(d) En el caso en que la solicitud resulte de la investigación de la violación de leyes y reglamentos, deberán especificarse las leyes y reglamentos que hayan podido vulnerarse así como la lista de personas u organismos que la Autoridad Solicitada supone que tienen en su poder la información solicitada o los lugares en los que pudiera obtenerse dicha información, en caso de que la Autoridad Solicitante tuviera conocimiento de ello; y

(e) El plazo en que se espera recibir la respuesta a la consulta o la asistencia técnica solicitada.

3. En caso de urgencia, las consultas o peticiones de asistencia técnica y las respuestas correspondientes pueden realizarse mediante procedimientos expeditos o mediante un tipo de comunicación que no sea el intercambio de cartas.

4. Las Autoridades acuerdan consultarse mutuamente en caso de cualquier dificultad que pudiera surgir.

Sección 2: Utilización de la Información.

1. La Autoridad Solicitante sólo podrá utilizar la información obtenida para los motivos indicados en la solicitud, para garantizar el cumplimiento o la aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias indicadas en la solicitud y por requerimiento de un proceso penal o un procedimiento administrativo iniciado tras una violación de las disposiciones indicadas en la solicitud.

2. Para cumplir con sus funciones legales, la Autoridad Solicitante podrá facilitar la información a otras Autoridades del mismo gobierno, teniendo que solicitar previamente autorización a la Autoridad Solicitada.

3. Cuando la Autoridad Solicitante desee utilizar la información recabada con fines distintos a los expresados en la solicitud, deberá requerir previamente el consentimiento de la Autoridad Solicitada. Al autorizar dicha utilización, la Autoridad Solicitada podrá supeditarla a ciertos requisitos que consideren pertinentes. Asimismo, podrá oponerse a la utilización de la información para fines diversos a los expresados en la solicitud.

4. No obstante, la Autoridad Solicitada no podrá divulgar aquella información que bajo las leyes aplicables resulte ser de carácter confidencial.

Sección 3: Confidencialidad de la Información.

Cada Autoridad preservará, con arreglo a los requisitos previstos legalmente, el carácter confidencial de las solicitudes o de los comunicados informativos en el ámbito del presente Memorando de Entendimiento, del contenido de dichas solicitudes y de cualquier otra cuestión relacionada con la aplicación del presente Memorando de Entendimiento, especialmente de las consultas entre Autoridades.

En todos los casos, la Autoridad Solicitante garantizará la información que recabe en aplicación del presente Memorando de Entendimiento y con arreglo a los requisitos previstos legalmente, un grado de confidencialidad que será por lo menos equivalente al que dicho tipo de información tenga en la jurisdicción de la Autoridad Solicitada.

Sección 4: Denegación de la Información.

1. La asistencia prevista en el presente Memorando de Entendimiento se denegará cuando:

a) La satisfacción de la solicitud pudiera afectar la seguridad, los intereses económicos fundamentales y el orden público de la República Dominicana y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
b) Se haya incoado cualquier proceso penal o se haya dictado una resolución definitiva en la jurisdicción de la Autoridad Solicitada, sobre la base de los mismos hechos y contra las mismas personas.
c) No sea permitida por las leyes y reglamentos.

2. La denegación de asistencia no perjudicará el derecho que tienen las Autoridades de consulta recíproca. Cuando la Autoridad Solicitada, no sea competente para dar respuesta a una solicitud de asistencia, la Autoridad Solicitada y la Autoridad Solicitante se consultarán sobre otros medios posibles para dar tratamiento a la solicitud.

ARTÍCULO IV: DISPOSICIONES FINALES

Sección 1: Vigencia

Este Memorando de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia inicial de dos (2) años.

Sección 2: Evaluación

Transcurridos dos (2) años desde la entrada en vigor de este Memorando de Entendimiento, las Autoridades efectuarán un examen de los resultados alcanzados a fin de ampliar o adecuar el contenido de este Memorando o sus objetivos.

Sección 3: Terminación

Cualquiera de las Autoridades podrá dar por terminada la vigencia de este Memorando de Entendimiento dando a la otra parte un aviso con treinta (30) días de anticipación. Si cualquiera de las Autoridades da dicho aviso, este Memorando de Entendimiento seguirá surtiendo sus efectos con respecto a todas las consultas y peticiones de asistencia técnica que se hubieren hecho antes de la fecha efectiva de la notificación, hasta en tanto la Autoridad requerida no haya concluido el asunto en materia de la solicitud.

Firmado en la ciudad de BAVARO, República Dominicana, hoy a los 28 días del mes de noviembre del año dos mil tres, en dos (2) originales en español, siendo cada uno igualmente auténticos.

Señor Yván Rodríguez Batista
Superintendente
Superintendencia de Valores
de República Dominicana

Señor Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado
Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO SOBRE CONSULTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

ANEJO

PERSONAS DE ENLACE

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE REPÚBLICA DOMINICANA

Sr. Angel Neris Castillo
Intendente de Valores
Email: a.castillo@siv.gov.do

OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Sr. Alfredo Padilla Cintrón
Comisionado
Email: apadilla@ocif.gobierno.pr